CONGRESO DE LA REPÚBLICA
Área de Trámite Documentario
25 JUN. 2025
RECIBIDO
Firma: Hora:

DICTAMEN FAVORABLE RECAÍDO EN LOS PROYECTOS DE LEY 4291/2022-CR, 4711/2022-CR, 5411/2022-CR, 5501/2022-CR, 7461/2023-CR, 7835/2023-CR, 8423/2023-CR, 8886/2024-CR, 8897/2024-CR y 10904/2024-CR POR EL QUE, CON TEXTO SUSTITUTORIO, SE PROPONE LA "LEY QUE DESIGNA AL PROFESIONAL RESPONSABLE DE LA TUTORÍA, LA ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y EL BIENESTAR SOCIOEMOCIONAL DEL ESTUDIANTE EN LAS INSTITUCIONES Y PROGRAMAS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA, Y ESTABLECE DISPOSICIONES PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE FACTORES DE RIESGO EN LA POBLACIÓN ESCOLAR"

COMISIÓN DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE
PERÍODO ANUAL DE SESIONES 2024-2025

Señor presidente:

Han ingresado para dictamen de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte los **proyectos de ley 4291/2022-CR,** a iniciativa del señor congresista **Paul Silvio Gutiérrez,** integrante del grupo parlamentario Bloque Magisterial De Concertación Nacional; **4711/2022-CR**, a iniciativa de la señora congresista **Digna Calle Lobatón**, integrante del grupo parlamentario Podemos Perú; **5411/2022-CR,** a iniciativa del señor congresista **María Jessica Córdova Lobatón,** integrante del grupo parlamentario Avanza País-Partido de Integración Social; **5501/2022-CR,** a iniciativa de la señora congresista **Martha Lupe Moyano Delgado,** integrante del grupo parlamentario Fuerza Popular; **7461/2023-CR,** a iniciativa del señor congresista **Alex Antonio Paredes Gonzales,** integrante del grupo parlamentario Bloque Magisterial De Concertación Nacional; **7835/2023-CR,** a iniciativa de la señora congresista **María Grimaneza Acuña Peralta,** integrante del grupo parlamentario Alianza para el Progreso; **8423/2023-CR,** a iniciativa del señor congresista **Segundo Teodomiro Quiroz Barboza,** integrante del grupo parlamentario Bloque Magisterial de Concertación Nacional; **8886/2024-CR** a iniciativa de la congresista **María Jessica Córdova Lobatón,** integrante del Grupo Parlamentario Renovación Popular; **8897/2024-CR,** a iniciativa del señor congresista **Waldemar Cerrón Rojas,** integrante del grupo parlamentario Perú Libre; y **10904/2024-CR,** a iniciativa del señor congresista **Nivardo Edgar Tello Montes,** integrante del grupo parlamentario Podemos Perú, por los que, con texto sustitutorio, se propone la ***"Ley que designa al profesional responsable de la tutoría, la orientación educativa y el bienestar socioemocional del estudiante en las instituciones y programas educativos públicos de la Educación Básica, y establece disposiciones para la prevención y atención de factores de riesgo en la población escolar".***

DICTAMEN FAVORABLE RECAÍDO EN LOS PROYECTOS DE LEY 4291/2022-CR, 4711/2022-CR, 5411/2022-CR, 5501/2022-CR, 7461/2023-CR, 7835/2023-CR, 8423/2023-CR, 8886/2024-CR, 8897/2024-CR y 10904/2024-CR POR EL QUE, CON TEXTO SUSTITUTORIO, SE PROPONE LA "LEY QUE DESIGNA AL PROFESIONAL RESPONSABLE DE LA TUTORÍA, LA ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y EL BIENESTAR SOCIOEMOCIONAL DEL ESTUDIANTE EN LAS INSTITUCIONES Y PROGRAMAS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA, Y ESTABLECE DISPOSICIONES PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE FACTORES DE RIESGO EN LA POBLACIÓN ESCOLAR"

I. SITUACIÓN PROCESAL

✓ **Proyectos de ley 4291/2022-CR,** ingresó al Área de Trámite y Digitalización de Documentos el 17 de febrero de 2023, siendo decretado el 22 de febrero de 2023 a la Comisión Presupuesto y Cuenta General de la República como primera comisión dictaminadora, y a la Comisión de Educación, Juventud y Deporte, como segunda comisión dictaminadora, para su estudio y dictamen correspondiente.

✓ **Proyecto de ley 4711/2022-CR,** ingresó al Área de Trámite y Digitalización de Documentos el 12 de abril de 2023, siendo decretado el 17 de abril de 2023 a la Comisión de Educación, Juventud y Deporte, como única comisión dictaminadora, para su estudio y dictamen correspondiente.

✓ **Proyecto de ley 5411/2022-CR,** ingresó al Área de Trámite y Digitalización de Documentos el 20 de junio de 2023, siendo decretado el 22 de junio de 2023 a la Comisión Presupuesto y Cuenta General de la República como primera comisión dictaminadora, y a la Comisión de Educación, Juventud y Deporte, como segunda comisión dictaminadora, para su estudio y dictamen correspondiente.

✓ **Proyecto de ley 5501/2022-CR,** ingresó al Área de Trámite y Digitalización de Documentos el 28 de junio de 2023, siendo decretado el 04 de julio de 2023 a la Comisión de Educación, Juventud y Deporte, como única comisión dictaminadora, para su estudio y dictamen correspondiente.

DICTAMEN FAVORABLE RECAÍDO EN LOS PROYECTOS DE LEY 4291/2022-CR, 4711/2022-CR, 5411/2022-CR, 5501/2022-CR, 7461/2023-CR, 7835/2023-CR, 8423/2023-CR, 8886/2024-CR, 8897/2024-CR y 10904/2024-CR POR EL QUE, CON TEXTO SUSTITUTORIO, SE PROPONE LA "LEY QUE DESIGNA AL PROFESIONAL RESPONSABLE DE LA TUTORÍA, LA ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y EL BIENESTAR SOCIOEMOCIONAL DEL ESTUDIANTE EN LAS INSTITUCIONES Y PROGRAMAS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA, Y ESTABLECE DISPOSICIONES PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE FACTORES DE RIESGO EN LA POBLACIÓN ESCOLAR"

✓ **Proyecto de ley 7461/2023-CR,** ingresó al Área de Trámite y Digitalización de Documentos el 3 de abril de 2024, siendo decretado el 5 de abril de 2024 a la Comisión de Educación, Juventud y Deporte, como primera comisión dictaminadora, y a la Comisión Presupuesto y Cuenta General de la República como segunda comisión dictaminadora para su estudio y dictamen correspondiente.

✓ **Proyecto de ley 7835/2023-CR,** ingresó al Área de Trámite y Digitalización de Documentos el 14 de mayo de 2024, siendo decretado el mismo día, a la Comisión Presupuesto y Cuenta General de la República como primera comisión dictaminadora, y a la Comisión de Educación, Juventud y Deporte, como segunda comisión dictaminadora, para su estudio y dictamen correspondiente.

✓ **Proyecto de ley 8423/2023-CR,** ingresó al Área de Trámite y Digitalización de Documentos el 18 de julio de 2024, siendo decretado el 19 de julio de 2024, a la Comisión de Educación, Juventud y Deporte como primera comisión dictaminadora, y, a la Comisión Presupuesto y Cuenta General de la República como segunda comisión dictaminadora, para su estudio y dictamen correspondiente.

✓ **Proyecto de ley 8886/2024-CR,** ingresó al Área de Trámite y Digitalización de Documentos el 11 de setiembre de 2024, siendo decretado el 13 de setiembre de 2024, a la Comisión de Educación, Juventud y Deporte como única comisión dictaminadora, para su estudio y dictamen correspondiente.

✓ **Proyecto de ley 8897/2024-CR,** ingresó al Área de Trámite y Digitalización de Documentos el 12 de setiembre de 2024, siendo decretado el 13 de setiembre de 2024 a la Comisión de Educación, Juventud y Deporte, como única comisión dictaminadora, para su estudio y dictamen correspondiente.

DICTAMEN FAVORABLE RECAÍDO EN LOS PROYECTOS DE LEY 4291/2022-CR, 4711/2022-CR, 5411/2022-CR, 5501/2022-CR, 7461/2023-CR, 7835/2023-CR, 8423/2023-CR, 8886/2024-CR, 8897/2024-CR y 10904/2024-CR POR EL QUE, CON TEXTO SUSTITUTORIO, SE PROPONE LA "LEY QUE DESIGNA AL PROFESIONAL RESPONSABLE DE LA TUTORÍA, LA ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y EL BIENESTAR SOCIOEMOCIONAL DEL ESTUDIANTE EN LAS INSTITUCIONES Y PROGRAMAS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA, Y ESTABLECE DISPOSICIONES PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE FACTORES DE RIESGO EN LA POBLACIÓN ESCOLAR"

✓ **Proyecto de ley 10904/2024-CR,** ingresó al Área de Trámite y Digitalización de Documentos el 25 de abril de 2025, siendo decretado el 28 de abril de 2025 a la Comisión Presupuesto y Cuenta General de la República como primera comisión dictaminadora, y a la Comisión de Educación, Juventud y Deporte, como segunda comisión dictaminadora, para su estudio y dictamen correspondiente.

✓ Después del análisis y debate correspondientes, la Comisión de Educación, Juventud y Deporte, en su decimosexta sesión ordinaria, realizada el 20 de mayo de 2025, en la sala 2 "Fabiola Salazar Leguía" del edificio Víctor Raúl haya de la Torre, se aprobó el dictamen que acumula los proyectos de ley 4291/2022-CR, 4711/2022-CR, 5411/2022-CR, 5501/2022-CR, 7461/2023-CR, 7835/2023-CR, 8423/2023-CR, 8886/2024-CR, 8897/2024-CR y 10904/2024-CR, que propone la "**Ley que designa al profesional de la tutoría, orientación educativa y bienestar socioemocional del estudiante en las instituciones y programas educativos públicos de la Educación Básica, y establece disposiciones para la prevención y atención de factores de riesgo en la población escolar**", por **MAYORÍA** de los presentes al momento de la votación y con la dispensa de la lectura y aprobación del acta para ejecutar los acuerdos tomados en la referida sesión.

Votaron a favor 18 señores congresistas: Segundo Toribio Montalvo Cubas, Alex Antonio Paredes Gonzales, Carlos Enrique Alva Rojas, Hamlet Echeverría Rodríguez, Jorge Alfonso Marticorena Mendoza, Elizabeth Sara Medina Hermosilla, Esdras Ricardo Medina Minaya, Juan Carlos Mori Celis, Alfredo Pariona Sinche, José Bernardo Pazo Nunura, Segundo Teodomiro Quiroz Barboza, Wilson Rusbel Quispe Mamani, Janet Milagros Rivas Chacara, Nivardo Edgar Tello Montes, Rosio Torres Salinas, Lucinda Vásquez Vela, Carlos Javier Zeballos Madariaga y Flavio Cruz Mamani.

DICTAMEN FAVORABLE RECAÍDO EN LOS PROYECTOS DE LEY 4291/2022-CR, 4711/2022-CR, 5411/2022-CR, 5501/2022-CR, 7461/2023-CR, 7835/2023-CR, 8423/2023-CR, 8886/2024-CR, 8897/2024-CR y 10904/2024-CR POR EL QUE, CON TEXTO SUSTITUTORIO, SE PROPONE LA "LEY QUE DESIGNA AL PROFESIONAL RESPONSABLE DE LA TUTORÍA, LA ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y EL BIENESTAR SOCIOEMOCIONAL DEL ESTUDIANTE EN LAS INSTITUCIONES Y PROGRAMAS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA, Y ESTABLECE DISPOSICIONES PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE FACTORES DE RIESGO EN LA POBLACIÓN ESCOLAR"

Votó en contra 1 señor congresista: Roberto Enrique Chiabra León.

Votaron en abstención 8 señores congresistas: Herrera Medina Nohelia, Guido Bellido Ugarte, Eduardo Enrique Castillo Rivas, Víctor Seferino Flores Ruiz, Paul Silvio Gutiérrez Ticona, Raúl Huamán Coronado, Flor Aidee Pablo Medina y Tania Estefany Ramírez García.

II. CONTENIDO DE LA PROPUESTA

✓ El **Proyecto de Ley N.° 4291/2022-CR** propone la "*Ley que dispone la conversión de plazas eventuales a plazas orgánicas de personal administrativo y de personal de promoción de tutoría y orientación educativa bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo N.° 276 de las instituciones educativas de educación básica, los institutos y escuelas de educación superior, los centros de educación técnico-productiva y las unidades de gestión educativa local a nivel nacional*".

La fórmula legal se estructura en dos artículos y dos disposiciones complementarias finales. El primer artículo establece como objeto de la ley la conversión progresiva de plazas eventuales en plazas orgánicas para el personal administrativo y el personal de promoción de tutoría y orientación educativa que labora en el sector educativo estatal. El segundo artículo define el ámbito de aplicación de la norma, comprendiendo a las instituciones educativas públicas de los niveles básico y superior, los CETPRO y las UGEL de todo el país. La primera disposición complementaria final encarga al Ministerio de Educación, en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas, la emisión de las disposiciones necesarias para su implementación, conforme a la disponibilidad presupuestal. Finalmente, la segunda disposición complementaria final señala que la ejecución de la presente ley no debe generar nuevos gastos al Tesoro Público, priorizándose el uso eficiente de los recursos asignados al sector educación.

DICTAMEN FAVORABLE RECAÍDO EN LOS PROYECTOS DE LEY 4291/2022-CR, 4711/2022-CR, 5411/2022-CR, 5501/2022-CR, 7461/2023-CR, 7835/2023-CR, 8423/2023-CR, 8886/2024-CR, 8897/2024-CR y 10904/2024-CR POR EL QUE, CON TEXTO SUSTITUTORIO, SE PROPONE LA "LEY QUE DESIGNA AL PROFESIONAL RESPONSABLE DE LA TUTORÍA, LA ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y EL BIENESTAR SOCIOEMOCIONAL DEL ESTUDIANTE EN LAS INSTITUCIONES Y PROGRAMAS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA, Y ESTABLECE DISPOSICIONES PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE FACTORES DE RIESGO EN LA POBLACIÓN ESCOLAR"

✓ El **Proyecto de ley 4711/2022-CR,** propone la *"Ley contra el bullying escolar", la* propuesta legislativa se estructura en dos artículos modificatorios respecto de la Ley 29719, Ley que promueve la convivencia sin violencia en las instituciones educativas, y dos disposiciones complementarias finales.

El Proyecto de Ley N.° 4711/2022-CR modifica diversos artículos de la Ley N.° 29719, con el objetivo de fortalecer el marco normativo para la prevención, intervención y erradicación del bullying escolar en las instituciones educativas. Para ello, se dispone la obligatoriedad de contar con un profesional de Psicología por cada institución educativa y, en caso de no contar con uno, se establece la provisión de atención psicológica virtual gratuita.

Asimismo, se refuerza el rol del Consejo Educativo Institucional (CONEI), que ahora debe reunirse mensualmente y ejecutar medidas concretas para sancionar y prevenir el acoso entre estudiantes, docentes y otros miembros de la comunidad educativa. Se asignan nuevas responsabilidades al Ministerio de Educación, tales como la elaboración del Plan Nacional contra la Violencia y el Acoso Escolar y la realización de encuestas virtuales semestrales.

En cuanto a los docentes, se les exige la creación de brigadas escolares contra el acoso, la detección y denuncia inmediata de incidentes, y se establecen sanciones severas por ocultar casos de violencia. El director debe liderar la implementación de estas políticas, coordinar con la Policía y el Ministerio Público, y reportar incidentes a la Defensoría del Pueblo. Los padres o apoderados del agresor están obligados a asumir los costos derivados del daño causado.

El proyecto incorpora nuevos artículos sobre las brigadas contra el acoso, el protocolo de actuación ante casos de violencia, los derechos de las víctimas —como recibir educación sin compartir aula con el agresor—, y las medidas disciplinarias que incluyen la posible expulsión del agresor.

También se obliga a las instituciones privadas a implementar cámaras de video vigilancia en las aulas y espacios comunes.
Finalmente, se establecen disposiciones complementarias para que el Poder Ejecutivo adecúe los reglamentos correspondientes y se publiquen el Protocolo y el Plan Nacional en un plazo de treinta días calendario desde la entrada en vigor de la ley.

✓ El **Proyecto de ley 5411/2022-CR,** propone la *"Ley que promueve la prevención de riesgo escolar desde la tutoría y bienestar socioemocional en las instituciones educativas", la* propuesta legislativa se estructura en trece artículos y dos disposiciones complementarias finales.

La fórmula legal del Proyecto de Ley 5411/2022-CR se estructura en trece artículos y dos disposiciones complementarias finales. En su artículo 1, establece como objeto la promoción del bienestar socioemocional y la prevención de riesgos sociales desde la tutoría educativa en las instituciones públicas de Educación Básica Regular y Alternativa. El artículo 2 delimita el ámbito de aplicación a todas las instituciones educativas públicas del país. Los artículos 3 y 4 disponen la designación progresiva de profesionales especializados: uno en prevención de violencia y bienestar socioemocional para el nivel primaria, y otro promotor en tutoría preventiva para el nivel secundaria, ambos con perfiles definidos. El artículo 5 enumera las líneas de prevención que aborda la ley, como embarazo adolescente, consumo de sustancias psicoactivas, pandillaje, trata de personas, trabajo infantil, discriminación, orientación vocacional, educación vial y fortalecimiento familiar. Los artículos 6 y 7 establecen la obligación de registrar casos y las responsabilidades del Ministerio de Educación en la elaboración de protocolos, supervisión y directrices. El artículo 8 otorga a la Defensoría del Pueblo la función de supervisar el cumplimiento normativo. El artículo 9 dispone la derivación de estudiantes en riesgo a centros especializados. Los artículos 10 y 11 reconocen a los actores de la comunidad educativa como agentes de

tutoría y ordenan la conformación de comités de bienestar socioemocional en cada institución. El artículo 12 regula la exclusividad del personal designado en las UGEL, y el artículo 13 define los criterios para el proceso de selección de profesionales. Finalmente, la primera disposición complementaria encarga al Ministerio de Educación reglamentar la ley en un plazo de treinta días, y la segunda deroga todas las normas que se opongan a su contenido.

✓ El **Proyecto de ley 5501/2022-CR**, propone la *"Ley que establece tolerancia cero al bullying escolar"*, la fórmula legal se estructura en dos artículos y una disposición complementaria final. El artículo 1 establece como objeto de la ley imponer una política de tolerancia cero frente al acoso escolar, disponiendo la expulsión del estudiante responsable cuando se registre su conducta en más de tres oportunidades en el Libro de Registro de Incidencias de la institución educativa. El artículo 2 modifica el artículo 11 de la Ley N.° 29719, Ley que promueve la convivencia sin violencia en las instituciones educativas, estableciendo que dicho Libro debe consignar de forma obligatoria los hechos de acoso entre estudiantes, el trámite seguido, los resultados de las investigaciones y las sanciones aplicadas. Cuando un estudiante reincide más de tres veces, se debe proceder a su expulsión inmediata, sin perjuicio de otras sanciones aplicables a la institución educativa. Finalmente, la Disposición Complementaria Final Única encarga al Poder Ejecutivo la adecuación del Reglamento de la Ley 29719, aprobado por Decreto Supremo N.° 010-2012-ED, en un plazo no mayor de treinta días calendario desde la entrada en vigencia de la presente norma.

✓ El **Proyecto de ley 7461/2023-CR**, propone la *"Ley que incorpora al profesional de la tutoría, orientación educativa y bienestar socioemocional en la Carrera Pública Magisterial"*, la fórmula legal se estructura en once artículos y dos disposiciones complementarias finales. El artículo 1 establece como objeto la incorporación de los profesionales que prestan servicios de tutoría y bienestar socioemocional al área de desempeño

pedagógico en la Carrera Pública Magisterial, reconociendo sus funciones, derechos, formación y régimen laboral. El artículo 2 amplía su alcance a todas las instituciones públicas de Educación Básica (EBR, EBE, EBA).

El artículo 3 dispone la designación progresiva de al menos un promotor de tutoría y orientación educativa en cada institución educativa, según disponibilidad presupuestal. El artículo 4 precisa sus funciones preventivas frente a problemáticas como el embarazo adolescente, la delincuencia juvenil, el consumo de drogas y la desintegración familiar. El artículo 5 ordena el registro obligatorio de los casos en el portal SíSeVe. El artículo 6 encarga al Ministerio de Educación la elaboración de protocolos para el tratamiento de la violencia escolar y el consumo de sustancias. El artículo 7 establece la obligación de derivar a estudiantes en riesgo a centros especializados. El artículo 8 enumera a los agentes de tutoría dentro de la comunidad educativa. El artículo 9 dispone la creación de comités de tutoría y bienestar socioemocional en cada institución. El artículo 10 regula que los especialistas asignados a DRE y UGEL tengan funciones a dedicación exclusiva y sean designados por concurso. El artículo 11 detalla el proceso de selección de los profesionales promotores mediante concurso público, basado en méritos y entrevistas. La primera disposición complementaria final encarga al Ministerio de Educación reglamentar la ley en un plazo de 30 días. La segunda disposición autoriza las modificaciones presupuestarias necesarias y la creación de plazas orgánicas para garantizar el servicio de tutoría en todo el sistema de educación básica pública.

✓ El **Proyecto de ley 7835/2023-CR**, propone la "*Ley que designa a-un promotor de la tutoría y orientación educativa en cada institución educativa de la Educación Básica Regular y Alternativa en el marco del bienestar socioemocional*", la fórmula legal se estructura en siete artículos y única disposición complementaria final; se compone de siete artículos y una disposición complementaria final. El artículo 1 establece como objeto de la ley la incorporación de promotores de tutoría y orientación educativa en

las instituciones públicas de educación básica regular y alternativa, con funciones específicas en el marco de la prevención de riesgos escolares. El artículo 2 determina que la ley se aplica a todas las instituciones educativas públicas de dichos niveles.

La propuesta legislativa en su artículo 3 declara de necesidad pública la designación progresiva de al menos un promotor por institución educativa, de acuerdo al presupuesto asignado al Ministerio de Educación. El artículo 4 detalla las funciones de los promotores, quienes actúan desde el ámbito pedagógico y socioemocional, abordando temas como violencia escolar, embarazo adolescente, pandillaje, trata de personas, consumo de drogas, violencia de género, trabajo infantil, educación sexual, vocacional y vial, fortalecimiento familiar y uso adecuado de redes sociales.

El artículo 5 impone al Ministerio de Educación la elaboración de protocolos claros para prevenir la violencia escolar y el consumo de sustancias. El artículo 6 establece que los especialistas a cargo de estos equipos en las UGEL deben ser seleccionados por concurso público y dedicarse exclusivamente a estas funciones. El artículo 7 regula los requisitos y criterios del concurso público para acceder al cargo de promotor de tutoría y orientación educativa. Finalmente, la disposición complementaria única dispone que el Ministerio de Educación debe reglamentar la presente ley en un plazo máximo de treinta días calendario.

Proyecto de ley 8423/2024-CR, propone la *"Ley para la integración del docente de tutoría y orientación socioemocional en la carrera magisterial pública"* la fórmula legal se estructura en cinco artículos y única disposición complementaria final.

DICTAMEN FAVORABLE RECAÍDO EN LOS PROYECTOS DE LEY 4291/2022-CR, 4711/2022-CR, 5411/2022-CR, 5501/2022-CR, 7461/2023-CR, 7835/2023-CR, 8423/2023-CR, 8886/2024-CR, 8897/2024-CR y 10904/2024-CR POR EL QUE, CON TEXTO SUSTITUTORIO, SE PROPONE LA "LEY QUE DESIGNA AL PROFESIONAL RESPONSABLE DE LA TUTORÍA, LA ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y EL BIENESTAR SOCIOEMOCIONAL DEL ESTUDIANTE EN LAS INSTITUCIONES Y PROGRAMAS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA, Y ESTABLECE DISPOSICIONES PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE FACTORES DE RIESGO EN LA POBLACIÓN ESCOLAR"

El proyecto de ley tiene por objeto integrar a los docentes que brindan servicios de tutoría, orientación educativa y bienestar socioemocional en instituciones públicas de Educación Básica (inicial, primaria y secundaria) a la Carrera Pública Magisterial. Esta integración se declara de interés nacional y necesidad pública, con el propósito de normar sus deberes y derechos, asegurar su formación continua, establecer mecanismos de evaluación periódica, y garantizar beneficios laborales que reconozcan su rol en el desarrollo integral de los estudiantes.

Como ámbito de aplicación incluye a docentes de instituciones educativas públicas de Educación Básica Regular (EBR) y Educación Básica Alternativa (EBA). Se establece que la designación de, al menos, un docente promotor por institución educativa se realizará de forma progresiva, conforme al presupuesto asignado al Ministerio de Educación.

Esta propuesta de ley, señala que el financiamiento de se realiza con cargo al presupuesto del MINEDU y de los gobiernos regionales, autorizándoseles a realizar las modificaciones presupuestales necesarias. Además, se establece la exclusividad funcional de estos docentes, quienes deben desempeñar su labor a tiempo completo sin ser asignados simultáneamente a otras funciones.

Proyecto de ley 8886/2024-CR, propone la *"Ley que establece medidas para una educación sin violencia escolar"*, la fórmula legal se estructura en tres artículos y única disposición complementaria final.

La fórmula legal del Proyecto de Ley 8886/2024-CR tiene como finalidad establecer medidas para una educación sin violencia frente al acoso escolar en todas sus formas dentro de las instituciones educativas, con la finalidad de erradicar cualquier conducta que genere violencia en el entorno escolar. Se orienta tanto a las relaciones entre estudiantes como

a las interacciones entre docentes y alumnos, reconociendo la necesidad de garantizar un entorno escolar seguro, respetuoso y libre de agresiones.

Para ello, el proyecto modifica sustancialmente varios artículos de la Ley N.° 29719, que promueve la convivencia sin violencia en las instituciones educativas. En primer lugar, redefine el objeto de la ley para incorporar expresamente todos los tipos de violencia escolar, incluyendo aquellas perpetradas por medios electrónicos. Asimismo, refuerza el rol del Consejo Educativo Institucional (CONEI), asignándole la responsabilidad de elaborar planes de convivencia escolar y aplicar sanciones, con un enfoque preventivo y restaurativo.

Además, se precisan nuevas obligaciones para el Ministerio de Educación, como la elaboración de directivas claras, la publicación de boletines informativos anuales sobre sana convivencia, la determinación proporcional de sanciones y la supervisión activa del cumplimiento normativo. Se incluye también el compromiso de proteger a las víctimas y garantizar que los estudiantes agresores accedan a consejería psicológica y/o psiquiátrica, así como el uso obligatorio de la plataforma SISEVE para el registro y seguimiento de casos.

En cuanto a los docentes, se les impone la obligación de denunciar los hechos de violencia o acoso de los que tengan conocimiento, bajo responsabilidad administrativa, y se les faculta a aplicar sanciones inmediatas en casos leves. De igual forma, se establece que ocultar incidentes será sancionado conforme a la Ley de Reforma Magisterial. Respecto a los padres y apoderados, se les exige colaborar activamente en la denuncia y corrección de conductas violentas, incluyendo el cumplimiento de la consejería de los estudiantes agresores.

Asimismo, introduce un mecanismo de control mediante el Libro de Registro de Incidencias, donde se documentan todos los casos de violencia escolar, el procedimiento seguido y la sanción impuesta. Un aspecto novedoso es la posibilidad de expulsión del estudiante que acumule tres o

más registros por actos graves con resolución definitiva, condición sujeta a la presentación de un certificado de consejería para ser admitido en otra institución.

Finalmente, el proyecto de ley modifica el artículo 52 de la Ley N.° 29944, Ley de Reforma Magisterial, ampliando el ámbito de la inhabilitación permanente para que los docentes sancionados por acoso u otras faltas graves no puedan ejercer funciones ni en instituciones educativas públicas ni privadas, ni en ningún nivel de gestión educativa.

La propuesta legislativa contempla una disposición complementaria final que otorga al Poder Ejecutivo un plazo de noventa días para adecuar el reglamento correspondiente, asegurando así su pronta implementación.

Proyecto de ley 8897/2024-CR, propone la *"Ley que incorpora a un promotor de tutoría, orientación educativa y se establece tolerancia cero ante cualquier acto de violencia escolar, en el marco del bienestar socioemocional"*, la fórmula legal se estructura en seis artículos y tres disposiciones complementarias finales.

La propuesta legislativa tiene por objeto incorporar un promotor de tutoría y orientación educativa en todas las instituciones públicas de Educación Básica Regular (EBR) y Educación Básica Alternativa (EBA), con la finalidad de fortalecer el bienestar socioemocional y establecer una política de tolerancia cero ante cualquier acto de violencia escolar.

Se dispone la designación progresiva de un profesional licenciado en educación, con registro en SUNEDU, como promotor de tutoría en cada institución educativa, con una carga laboral de 30 horas pedagógicas. El Ministerio de Educación determinará sus funciones específicas, enfocadas en la prevención de la violencia escolar en todas sus formas, siendo responsable de su implementación desde el inicio del año escolar.

DICTAMEN FAVORABLE RECAÍDO EN LOS PROYECTOS DE LEY 4291/2022-CR, 4711/2022-CR, 5411/2022-CR, 5501/2022-CR, 7461/2023-CR, 7835/2023-CR, 8423/2023-CR, 8886/2024-CR, 8897/2024-CR y 10904/2024-CR POR EL QUE, CON TEXTO SUSTITUTORIO, SE PROPONE LA "LEY QUE DESIGNA AL PROFESIONAL RESPONSABLE DE LA TUTORÍA, LA ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y EL BIENESTAR SOCIOEMOCIONAL DEL ESTUDIANTE EN LAS INSTITUCIONES Y PROGRAMAS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA, Y ESTABLECE DISPOSICIONES PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE FACTORES DE RIESGO EN LA POBLACIÓN ESCOLAR"

La propuesta dispone que cada institución educativa debe contar con un Libro de Registro de Incidencias para documentar actos de violencia, consumo de sustancias psicoactivas y las medidas adoptadas. Se establece el traslado inmediato de estudiantes reincidentes a otras modalidades educativas, e incluso su exclusión de la educación pública presencial, preservando su derecho a la educación mediante opciones virtuales.

Dispone que el acceso al cargo de promotor se regula mediante concurso público, considerando criterios como formación profesional, estudios complementarios, experiencia y méritos. Finalmente, se faculta al Ministerio de Educación y al Ministerio de Economía y Finanzas para realizar modificaciones presupuestarias y crear las plazas necesarias, y se encarga al Poder Ejecutivo reglamentar la ley en un plazo de 30 días calendario. Se derogan todas las disposiciones legales que se opongan a la presente norma.

Proyecto de ley 10904/2024-CR, propone la "*Ley que designa a un promotor de tutoría y orientación educativa en el marco de la prevención de la violencia en todas sus modalidades en la etapa educativa*", la fórmula legal se estructura en tres artículos y tres disposiciones complementarias finales; establece la designación obligatoria de un Promotor de Tutoría y Orientación Educativa en todas las instituciones públicas de Educación Básica Regular y Educación Básica Alternativa, con el objetivo de prevenir la violencia escolar en todas sus modalidades a lo largo de la etapa educativa.

La norma propone modificar el artículo 76 de la Ley 29944, Ley de Reforma Magisterial, para incorporar a estos profesionales dentro del régimen de contratación docente, permitiendo su ingreso mediante concurso público. Se establece como requisito indispensable contar con título pedagógico registrado en SUNEDU y un informe psicológico emitido por un centro de salud.

Refiere que, el promotor cumple funciones orientadas a la prevención del pandillaje, el consumo de drogas, la discriminación, el abuso sexual, el embarazo adolescente, y otras formas de violencia, además de brindar orientación vocacional y derivación de estudiantes con factores de riesgo.

Además, señala que el cargo es de jornada laboral de 30 horas pedagógicas, y depende de las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) del área correspondiente. El Ministerio de Educación tiene la obligación de elaborar protocolos específicos para abordar la violencia escolar, y de implementar medidas preventivas tanto dentro como fuera del entorno educativo.

Finalmente, se dispone que el Poder Ejecutivo reglamente la ley en un plazo máximo de 30 días calendario y se autoriza la creación de las plazas necesarias para garantizar la presencia de promotores en todas las instituciones educativas del país. Se derogan todas las disposiciones legales que se opongan a lo establecido en esta ley.

III. OPINIONES SOLICITADAS E INFORMACIÓN RECIBIDA

De conformidad con los artículos 69 y 70 del Reglamento del Congreso de la República, la Comisión de Educación, Juventud y Deporte solicitó opinión técnico-legal respecto a los referidos proyectos de ley a las siguientes entidades:

3.1. Opiniones solicitadas

✓ **Proyecto de Ley 4291/2022-CR**

- Con Oficio P.O. N.° 1269-2022-2023-CEJYD/CR, de fecha 1 de marzo de 2023, solicitando opinión al señor Oscar Manuel Becerra Tresierra, ministro de Educación, respecto al Proyecto de Ley 4291/2022-CR.

- Con Oficio P.O. N.° 1270-2022-2023-CEJYD/CR, de fecha 1 de marzo de 2023, solicitando opinión al señor Alex Contreras Miranda, ministro de Economía y Finanzas, respecto al Proyecto de Ley 4291/2022-CR.
- Con Oficio P.O. N.° 1271-2022-2023-CEJYD/CR, de fecha 1 de marzo de 2023, solicitando opinión a la señora Janeyri Elizabeth Boyer Carrera, presidenta ejecutiva de SERVIR, respecto al Proyecto de Ley 4291/2022-CR.

- Con Oficio P.O. N.° 1272-2022-2023-CEJYD/CR, de fecha 1 de marzo de 2023, solicitando opinión al señor Pablo Helí Ocaña Alejo, Decano Nacional del Colegio de Profesores del Perú, respecto al Proyecto de Ley 4291/2022-CR.

✓ **Proyecto de ley 4711/2022-CR**

- Con Oficio P.O. N.° 1594-2022-2023-CEJYD/CR, de fecha 20 de abril de 2023, solicitando opinión al señor Oscar Manuel Becerra Tresierra, ministro de Educación, respecto al Proyecto de Ley 4711/2022-CR.

- Con Oficio P.O. N.° 1595-2022-2023-CEJYD/CR, de fecha 20 de abril de 2023, solicitando opinión al señor Julio Javier Demartini Montes, ministro de Desarrollo e Inclusión Social, respecto al Proyecto de Ley 4711/2022-CR.

- Con Oficio P.O. N.° 1596-2022-2023-CEJYD/CR, de fecha 20 de abril de 2023, solicitando opinión a la señora Grecia Elena Rojas Ortiz, ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, respecto al Proyecto de Ley 4711/2022-CR.

- Con Oficio P.O. N.° 1597-2022-2023-CEJYD/CR, de fecha 20 de abril de 2023, solicitando opinión a la señora Rosa Bertha Gutiérrez Palomino, ministra de Salud, respecto al Proyecto de Ley 4711/2022-CR.

- Con Oficio P.O. N.° 1598-2022-2023-CEJYD/CR, de fecha 20 de abril de 2023, solicitando opinión al señor Carlos Federico Barreda Tamayo, presidente del Consejo Directivo Ad Hoc del SINEACE, respecto al Proyecto de Ley 4711/2022-CR.
- Con Oficio P.O. N.° 1599-2022-2023-CEJYD/CR, de fecha 20 de abril de 2023, solicitando opinión a la señora Rosa Bertha Gutiérrez Palomino, ministra de Salud, respecto al Proyecto de Ley 4711/2022-CR.

- Con Oficio P.O. N.° 1600-2022-2023-CEJYD/CR, de fecha 20 de abril de 2023, solicitando opinión a la señora Rosa Bertha Gutiérrez Palomino, ministra de Salud, respecto al Proyecto de Ley 4711/2022-CR.

✓ **Proyecto de ley 5411/2022-CR**

- Con Oficio P.O. N.° 2084-2022-2023-CEJYD/CR, de fecha 3 de julio de 2023, solicitando opinión a la señora Magnet Carmen Márquez Ramírez, ministra de Educación.

- Con Oficio P.O. N.° 2085-2022-2023-CEJYD/CR, de fecha 3 de julio de 2023, solicitando opinión al señor César Henry Vásquez Sánchez, ministro de Salud.

- Con Oficio P.O. N.° 2086 -2022-2023-CEJYD/CR, de fecha 3 de julio de 2023, solicitando opinión al señor Vicente Romero Fernández, ministro del Interior.

- Con Oficio P.O. N.° 2087 -2022-2023-CEJYD/CR, de fecha 3 de julio de 2023, solicitando opinión al señor Alex Contreras Miranda, ministro de Economía y Finanzas.

DICTAMEN FAVORABLE RECAÍDO EN LOS PROYECTOS DE LEY 4291/2022-CR, 4711/2022-CR, 5411/2022-CR, 5501/2022-CR, 7461/2023-CR, 7835/2023-CR, 8423/2023-CR, 8886/2024-CR, 8897/2024-CR y 10904/2024-CR POR EL QUE, CON TEXTO SUSTITUTORIO, SE PROPONE LA "LEY QUE DESIGNA AL PROFESIONAL RESPONSABLE DE LA TUTORÍA, LA ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y EL BIENESTAR SOCIOEMOCIONAL DEL ESTUDIANTE EN LAS INSTITUCIONES Y PROGRAMAS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA, Y ESTABLECE DISPOSICIONES PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE FACTORES DE RIESGO EN LA POBLACIÓN ESCOLAR"

- Con Oficio P.O. N.° 2088-2022-2023-CEJYD/CR, de fecha 3 de julio de 2023, solicitando opinión al señor Luis Guillermo Lescano Sáenz, presidente del Consejo Nacional de Educación (CNE).

- Con Oficio P.O. N.° 2089-2022-2023-CEJYD/CR, de fecha 3 de julio de 2023, solicitando opinión a la señora Betsabé Márquez, presidenta de la Asociación de Colegios Particulares Amigos (ADECOPA).

- Con Oficio P.O. N.° 2090-2022-2023-CEJYD/CR, de fecha 3 de julio de 2023, solicitando opinión al señor Rohel Sánchez Sánchez, presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR)

- Con Oficio P.O. N.° 2091-2022-2023-CEJYD/CR, de fecha 3 de julio de 2023, solicitando opinión a la señora María Inés Prado Vargas – Machuca, presidenta de la Asociación de Colegios Privados de Asociaciones Culturales (ADCA).

- Con Oficio P.O. N.° 2092-2022-2023-CEJYD/CR, de fecha 3 de julio de 2023, solicitando opinión al señor Edgardo Palomino Huamanchumo, presidente de la Asociación de Colegios Privados de Lima (ACOPRIL).

- Con Oficio P.O. N.° 2093-2022-2023-CEJYD/CR, de fecha 3 de julio de 2023, solicitando opinión al señor Edgardo Palomino Huamanchumo, presidente de la Asociación de Colegios Privados de Lima (ACOPRIL).

- Con Oficio P.O. N.° 2094-2022-2023-CEJYD/CR, de fecha 3 de julio de 2023, solicitando opinión al señor Guido Quintanilla Gómez, presidente de la Asociación Nacional de Colegios Privados del Perú (ANACOPRI).

DICTAMEN FAVORABLE RECAÍDO EN LOS PROYECTOS DE LEY 4291/2022-CR, 4711/2022-CR, 5411/2022-CR, 5501/2022-CR, 7461/2023-CR, 7835/2023-CR, 8423/2023-CR, 8886/2024-CR, 8897/2024-CR y 10904/2024-CR POR EL QUE, CON TEXTO SUSTITUTORIO, SE PROPONE LA "LEY QUE DESIGNA AL PROFESIONAL RESPONSABLE DE LA TUTORÍA, LA ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y EL BIENESTAR SOCIOEMOCIONAL DEL ESTUDIANTE EN LAS INSTITUCIONES Y PROGRAMAS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA, Y ESTABLECE DISPOSICIONES PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE FACTORES DE RIESGO EN LA POBLACIÓN ESCOLAR"

✓ **Proyecto de ley 5501/2022-CR**

- Con Oficio P.O. N.° 2237-2022-2023-CEJYD/CR, de fecha 12 de julio de 2023, solicitando opinión a la señora Magnet Carmen Márquez Ramírez, ministra de Educación.

- Con Oficio P.O. N.° 2238-2022-2023-CEJYD/CR, de fecha 12 de julio de 2023, solicitando opinión a la señora Nancy Rosalina Tolentino Gamarra, ministra de la Mujer y de Poblaciones Vulnerables.

- Con Oficio P.O. N.° 2239-2022-2023-CEJYD/CR, de fecha 12 de julio de 2023, solicitando opinión al señor Luis Guillermo Lescano Sáenz, presidente del Consejo Nacional de Educación (CNE).

- Con Oficio P.O. N.° 2240-2022-2023-CEJYD/CR, de fecha 12 de julio de 2023, solicitando opinión al señor Rohel Sánchez Sánchez, presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR).

- Con Oficio P.O. N.° 2241-2022-2023-CEJYD/CR, de fecha 12 de julio de 2023, solicitando opinión al señor Dennys Cuba Rivera, presidente de la Asociación de Municipalidades del Perú (AMPE)

✓ **Proyecto de ley 7461/2023-CR**

- Con Oficio P.O. N.° 2613-2022-2023-CEJYD/CR, de fecha 11 de julio de 2023, solicitando opinión al señor Morgan Niccolo Quero Gaime, ministro de Educación.

- Con Oficio P.O. N.° 2614-2022-2023-CEJYD/CR, de fecha 12 de julio de 2023, solicitando opinión al señor José Berley Arista Arbildo, ministro de Economía y Finanzas.

DICTAMEN FAVORABLE RECAÍDO EN LOS PROYECTOS DE LEY 4291/2022-CR, 4711/2022-CR, 5411/2022-CR, 5501/2022-CR, 7461/2023-CR, 7835/2023-CR, 8423/2023-CR, 8886/2024-CR, 8897/2024-CR y 10904/2024-CR POR EL QUE, CON TEXTO SUSTITUTORIO, SE PROPONE LA "LEY QUE DESIGNA AL PROFESIONAL RESPONSABLE DE LA TUTORÍA, LA ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y EL BIENESTAR SOCIOEMOCIONAL DEL ESTUDIANTE EN LAS INSTITUCIONES Y PROGRAMAS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA, Y ESTABLECE DISPOSICIONES PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE FACTORES DE RIESGO EN LA POBLACIÓN ESCOLAR"

✓ **Proyecto de ley 8423/2023-CR**

- Con Oficio N° 039-2024-2025-CEJD/CR, de fecha 5 de setiembre de 2024, solicitando opinión al señor Marco Tulio Domínguez Matos, decano nacional del Colegio de Profesores del Perú.

- Con Oficio N°040-2024-2025-CEJD/CR, de fecha 5 de setiembre de 2024, solicitando opinión al señor Morgan Niccolo Quero Gaime, ministro de Educación.

- Con Oficio N°041-2024-2025-CEJD/CR, de fecha 5 de setiembre de 2024, solicitando opinión al señor Luis Guillermo Lescano Sáenz, presidente del Consejo Nacional de Educación – CNE.

✓ **Proyecto de ley 8886/2024-CR**

- Con Oficio N°0603-2024-2025-CEJD/CR, de fecha 27 de setiembre de 2024, solicitando opinión al señor Morgan Niccolo Quero Gaime, ministro de Educación.

- Con Oficio N°0604-2024-2025-CEJD/CR, de fecha 27 de setiembre de 2024, solicitando opinión al señor Marco Tulio Domínguez Matos, Decano Nacional del Colegio de Profesores del Perú.

- Con Oficio N°0605-2024-2025-CEJD/CR, de fecha 27 de setiembre de 2024, solicitando opinión al señor Josué Manuel Gutiérrez Cóndor, Defensor del Pueblo.

- Con Oficio N°0606-2024-2025-CEJD/CR, de fecha 27 de setiembre de 2024, solicitando opinión a la señora Ángela Teresa Hernández Cajo, ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.

DICTAMEN FAVORABLE RECAÍDO EN LOS PROYECTOS DE LEY 4291/2022-CR, 4711/2022-CR, 5411/2022-CR, 5501/2022-CR, 7461/2023-CR, 7835/2023-CR, 8423/2023-CR, 8886/2024-CR, 8897/2024-CR y 10904/2024-CR POR EL QUE, CON TEXTO SUSTITUTORIO, SE PROPONE LA "LEY QUE DESIGNA AL PROFESIONAL RESPONSABLE DE LA TUTORÍA, LA ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y EL BIENESTAR SOCIOEMOCIONAL DEL ESTUDIANTE EN LAS INSTITUCIONES Y PROGRAMAS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA, Y ESTABLECE DISPOSICIONES PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE FACTORES DE RIESGO EN LA POBLACIÓN ESCOLAR"

✓ **Proyecto de ley 8897/2024-CR**

- Con Oficio N.° 761-2024-2025-CEJD/CR, de fecha 21 de octubre de 2024, solicitando opinión al señor Morgan Niccolo Quero Gaime, ministro de Educación.
- Con Oficio N.° 763-2024-2025-CEJD/CR, de fecha 21 de octubre de 2024, solicitando opinión al señor al señor José Berley Arista Arbildo, ministro de Economía y Finanzas.

- Con Oficio N.° 764-2024-2025-CEJD/CR, de fecha 21 de octubre de 2024, solicitando opinión al señor Marco Tulio Domínguez Matos, decano nacional del Colegio de Profesores del Perú.

- Con Oficio N.° 767-2024-2025-CEJD/CR, de fecha 21 de octubre de 2024, solicitando opinión al señor Javier Arévalo Vela, presidente del Poder Judicial.

3.2. **Información recibida**

Proyecto de Ley 4291/2022-CR

✓ Con Oficio 000239-2023-SERVIR-PE, de fecha 4 de abril de 2023, la señora Ana Isabel Pari Morales, presidente ejecutiva del Consejo Directivo de la PCM, emite opinión técnica sobre el Proyecto de Ley 4291/2022-CR

✓ Con Oficio 1381-2023-EF/10.01, de fecha 4 de abril de 2023, el señor Alex Alonso Contreras Miranda, ministro de Economía y Finanzas, emite opinión técnica sobre el Proyecto de Ley 4291/2022-CR

DICTAMEN FAVORABLE RECAÍDO EN LOS PROYECTOS DE LEY 4291/2022-CR, 4711/2022-CR, 5411/2022-CR, 5501/2022-CR, 7461/2023-CR, 7835/2023-CR, 8423/2023-CR, 8886/2024-CR, 8897/2024-CR y 10904/2024-CR POR EL QUE, CON TEXTO SUSTITUTORIO, SE PROPONE LA "LEY QUE DESIGNA AL PROFESIONAL RESPONSABLE DE LA TUTORÍA, LA ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y EL BIENESTAR SOCIOEMOCIONAL DEL ESTUDIANTE EN LAS INSTITUCIONES Y PROGRAMAS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA, Y ESTABLECE DISPOSICIONES PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE FACTORES DE RIESGO EN LA POBLACIÓN ESCOLAR"

Proyecto de Ley 4711/2022-CR

- ✓ Con Oficio N° D000344-2023-MIDIS-DM, de fecha 05 de mayo de 2023, el señor Julio Javier Demartini Montes, ministro de Desarrollo e Inclusión Social, remite opinión técnica sobre el Proyecto de Ley 4711/2022-CR, adjunta el Informe N° D000271-2023-MIDIS-OGAJ.

- ✓ Con Oficio 00258-2023-SINEACE/P, de fecha 17 de mayo de 2023, el señor Carlos Barreda Tamayo, presidente del Consejo Directivo Ad Hoc Sineace, remite opinión técnica sobre el Proyecto de Ley 4711/2022-CR, adjunta el Informe Legal N° 000233-2023-SINEACE/P-GG-OAJ.

- ✓ Con Oficio 2574-2023-MINEDU/SG, de fecha 22 de junio de 2023, la señora Norma Karina Carpio Sotomayor, secretaria general (e) del Ministerio de Educación, remite opinión técnica sobre el Proyecto de Ley 4711/2022-CR, adjunta el Informe 00766-2023-MINEDU/SG-OGAJ.

- ✓ Con Oficio D001185-2023-MIMP-SG, de fecha 21 de junio de 2023, el señor José Ernesto Montalva de Falla, secretario general del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, remite opinión técnica sobre el Proyecto de Ley 4711/2022-CR, adjunta el Informe D000525-2023-MIMP-OGAJ.

Proyecto de ley 5411/2022-CR

- ✓ Con Oficio Nro. 316-2023-GOREMAD/GR, de fecha 14 de agosto de 2023, el señor Luis Otsuka Salazar, Gobernador Regional de Madre de Dios, quien adjunta Informe N°032-2023-GOREMAD/DRE- DGP/EES-JLG para los fines pertinentes.

DICTAMEN FAVORABLE RECAÍDO EN LOS PROYECTOS DE LEY 4291/2022-CR, 4711/2022-CR, 5411/2022-CR, 5501/2022-CR, 7461/2023-CR, 7835/2023-CR, 8423/2023-CR, 8886/2024-CR, 8897/2024-CR y 10904/2024-CR POR EL QUE, CON TEXTO SUSTITUTORIO, SE PROPONE LA "LEY QUE DESIGNA AL PROFESIONAL RESPONSABLE DE LA TUTORÍA, LA ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y EL BIENESTAR SOCIOEMOCIONAL DEL ESTUDIANTE EN LAS INSTITUCIONES Y PROGRAMAS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA, Y ESTABLECE DISPOSICIONES PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE FACTORES DE RIESGO EN LA POBLACIÓN ESCOLAR"

- ✓ Con Oficio N° 117-APPTOE-2023, de fecha 12 de diciembre de 2023, el señor Freddy Luis Ascanoa Rojas, presidente de la Asociación de profesionales promotores de tutoría y orientación educativa, corre traslado el Oficio N° D000146-2023-MML-OGSC, que incluye a la vez el Informe N° D 000109-2023-MML-GDH, referido a la opinión técnica sobre el Proyecto de Ley 5411/2022-CR *(Ley que Promueve la Prevención de Riesgo escolar desde las tutorías y Bienestar socioemocional en las Instituciones Educativas).*

- ✓ Con Oficio N° 000481-2023-SINEACE/P, de fecha 18 de julio de 2023, el señor Carlos Barreda Tamayo, presidente del Consejo Directivo Ad Hoc Sineace, quien adjunta Informe Legal N° 000336-2023-SINEACE/P-GG-OAJ respecto a la opinión sobre el Proyecto de Ley 5411/2022-CR.

- ✓ Con Oficio N° D000157-2023-IN-SG, de fecha 8 de agosto de 2023, la señora Tabata Dulce Vivanco Del Castillo, secretaria general del Ministerio del Interior, remite informe N° 1636-2023/IN/OGAJ elaborado por la Oficina General de Asesoría Jurídica de ese Ministerio, el cual contiene la opinión sobre el citado proyecto de ley.

- ✓ Con Oficio N° 91-APPTOE-2023, de fecha 1 de setiembre de 2023, el señor Freddy Luis Ascanoa Rojas, presidente de la Asociación de profesionales, promotores de tutoría y orientación, remite Informe de Opinión técnica N° 02-2023-APPTOE, respecto al proyecto de ley 5411/2022-CR.

- ✓ Con Oficio N° D0003906-2023-SG- MINSA, de fecha 13 de setiembre de 2023, el señor José Ernesto Vidal Fernández, secretario general del Ministerio de Salud, remite Informe N° D000925-2023-OGAJ-MINSA elaborado por la Oficina General de Asesoría Jurídica de ese Ministerio, el cual contiene la opinión sobre el citado proyecto de ley.

DICTAMEN FAVORABLE RECAÍDO EN LOS PROYECTOS DE LEY 4291/2022-CR, 4711/2022-CR, 5411/2022-CR, 5501/2022-CR, 7461/2023-CR, 7835/2023-CR, 8423/2023-CR, 8886/2024-CR, 8897/2024-CR y 10904/2024-CR POR EL QUE, CON TEXTO SUSTITUTORIO, SE PROPONE LA "LEY QUE DESIGNA AL PROFESIONAL RESPONSABLE DE LA TUTORÍA, LA ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y EL BIENESTAR SOCIOEMOCIONAL DEL ESTUDIANTE EN LAS INSTITUCIONES Y PROGRAMAS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA, Y ESTABLECE DISPOSICIONES PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE FACTORES DE RIESGO EN LA POBLACIÓN ESCOLAR"

- ✓ Con Oficio N° 4189 – 2023-MINEDU/SG, de fecha 19 de octubre de 2023, la señora Ana Grimanesa Reátegui Ñaupari, secretaria general del Ministerio de Educación, remite Informe N° 01195-2023-MINEDU/SG-OGAJ, elaborado por la Oficina General de Asesoría Jurídica del Ministerio de Educación respecto a opinión técnica del referido proyecto.

- ✓ Con Oficio N° 423 – 2023/CEN SUTEP, de fecha 20 de setiembre de 2023, el señor Lucio Castro Chipana, secretario General del Sindicato Único de Trabajadores del Perú emite respaldo al Proyecto de Ley 5411/2022-CR.

- ✓ Con Oficio N° 546–2023-MPC/GDH, de fecha 06 de octubre de 2023, la señora Vanessa Villarán Jeanneau, gerente de Desarrollo Humano, de la Municipalidad del Callao, quien eleva al Congreso de la República opinión favorable al proyecto de ley 5411/2022-CR.

- ✓ Con Oficio N° 10666–2023-GRLL-GGR-GRE, de fecha 29 de octubre de 2023, el señor Julio Martin Camacho Paz, de la Gerencia Regional de Educación del Gobierno Regional La Libertad, quien adjunta Informe N° 000012-2023-GRLL-GGR-GRE-SGGP-JCT, respecto a la opinión favorable al Proyecto de Ley N° 5411/2022–CR.

- ✓ Con Oficio N° 022–2024-CRPLM, de fecha 24 de mayo de 2024, el señor Lic. Hannover Vela Vásquez, Decano del Colegio Regional de profesores de Lima Metropolitana, remite opinión sobre el proyecto de ley 5411/2022-CR, proyecto de ley 7461/2023-CR y proyecto de ley 7835/2023- CR.

- ✓ Con Oficio N° 2024–2024-EF/10.01, de fecha 21 de agosto de 2024, el señor José Arista Arbildo, ministro de Economía y Finanzas, adjunta Informe N° 0556-2024-EF/50.04 de la Dirección de Normatividad de la mencionada Dirección General, referente a la opinión técnica del citado proyecto.

DICTAMEN FAVORABLE RECAÍDO EN LOS PROYECTOS DE LEY 4291/2022-CR, 4711/2022-CR, 5411/2022-CR, 5501/2022-CR, 7461/2023-CR, 7835/2023-CR, 8423/2023-CR, 8886/2024-CR, 8897/2024-CR y 10904/2024-CR POR EL QUE, CON TEXTO SUSTITUTORIO, SE PROPONE LA "LEY QUE DESIGNA AL PROFESIONAL RESPONSABLE DE LA TUTORÍA, LA ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y EL BIENESTAR SOCIOEMOCIONAL DEL ESTUDIANTE EN LAS INSTITUCIONES Y PROGRAMAS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA, Y ESTABLECE DISPOSICIONES PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE FACTORES DE RIESGO EN LA POBLACIÓN ESCOLAR"

Proyecto de ley 5501/2022-CR

- ✓ Con Oficio N°211-2023-CNE, de fecha 5 de diciembre del 2023, el señor Luis Lescano Sáenz, presidente del Consejo Nacional de Educación, remite opinión técnica respecto al proyecto que propone la "Ley que establece tolerancia cero al acoso escolar".

- ✓ Con Oficio N° D001633-2023-MIMP-SG, de fecha 21 de agosto del 2023, el señor José Ernesto Montalva De Falla, secretario general del Ministerio de la mujer y poblaciones vulnerables, remite opinión técnica respecto al proyecto que propone la "Ley que establece tolerancia cero al acoso escolar", adjunto el Informe N° D000738-2023-MIMP-OGAJ, elaborado por la Oficina General de Asesoría Jurídica del sector.

- ✓ Con Oficio N° 03505-2023-MINEDU/SG, de fecha 31 de agosto del 2023, el señor Eduardo Gómez García, secretario general del Ministerio de Educación, remite opinión técnica sobre la citada iniciativa legislativa, para tal efecto, adjunta Informe N° 01101-2023-MINEDU/SG-OGAJ, elaborado por la Oficina General de Asesoría Jurídica del sector.

- ✓ Con Oficio N° 91-APPTOE-2023, de fecha 4 de setiembre de 2023, el señor Freddy Luis Ascanoa Rojas, presidente de la Asociación de profesionales, promotores de tutoría y orientación, remite Informe de Opinión técnica N° 03-2023-APPTOE, respecto al proyecto de ley 5501/2022-CR.

Proyecto de ley 7461/2023-CR

- ✓ Con Oficio N° 26-APPTOE-2023, de fecha 9 de abril de 2024, el señor Freddy Luis Ascanoa Rojas, presidente de la Asociación de profesionales, promotores de tutoría y orientación, remite Informe de Opinión técnica N° 01-2024-APPTOE, respecto al proyecto de ley 7461/2023-CR.

- ✓ Con Oficio N° 019 -2024/SUMACOL-P, de fecha 19 de mayo de 2024, la señora María Elena Aguilar Macizo, presidenta de la Sociedad Unida de Maestros contratados de Lima, remite opinión sobre el proyecto de ley sobre la "Ley que incorpora al profesional de la tutoría, orientación educativa y bienestar socioemocional *en la carrera pública magisterial*".

- ✓ Con Oficio N° 022-2024- CRPLM, de fecha 24 de mayo de 2024, el Lic. Hannover Vela Vásquez, Decano del Colegio Regional de profesores de Lima Metropolitana, remite opinión sobre el proyecto de ley 5411/2022-CR, proyecto de ley 7461/2023-CR y proyecto de ley 7835/2023- CR.

Proyecto de ley 7835/2023-CR

- ✓ Con Oficio N° 55-APPTOE-2024, de fecha 24 de mayo de 2024, el señor Freddy Luis Ascanoa Rojas, presidente de la Asociación de profesionales, promotores de tutoría y orientación, remite Informe de Opinión técnica N° 02-2024-APPTOE, respecto al referido proyecto de ley.

- ✓ Con Oficio N° 022-2024- CRPLM, de fecha 24 de mayo de 2024, el Lic. Hannover Vela Vásquez, Decano del Colegio Regional de profesores de Lima Metropolitana, remite opinión sobre el proyecto de ley 5411/2022-CR, proyecto de ley 7461/2023-CR y proyecto de ley 7835/2023- CR.

Proyecto de ley 8423/2023-CR

- ✓ Con Oficio N.° 02399-2024-MINEDU/SG, de fecha 18 de octubre de 2024, la señora Gavilano Iglesias Doris, secretaria general del Ministerio de Educación, quien adjunta Informe N° 1356-2024-MINEDU/SG-OGAJ elaborado por la Oficina General de Asesoría Jurídica del Ministerio de Educación.

DICTAMEN FAVORABLE RECAÍDO EN LOS PROYECTOS DE LEY 4291/2022-CR, 4711/2022-CR, 5411/2022-CR, 5501/2022-CR, 7461/2023-CR, 7835/2023-CR, 8423/2023-CR, 8886/2024-CR, 8897/2024-CR y 10904/2024-CR POR EL QUE, CON TEXTO SUSTITUTORIO, SE PROPONE LA "LEY QUE DESIGNA AL PROFESIONAL RESPONSABLE DE LA TUTORÍA, LA ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y EL BIENESTAR SOCIOEMOCIONAL DEL ESTUDIANTE EN LAS INSTITUCIONES Y PROGRAMAS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA, Y ESTABLECE DISPOSICIONES PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE FACTORES DE RIESGO EN LA POBLACIÓN ESCOLAR"

Proyecto de ley 8886/2024-CR

- ✓ Con Oficio N.° 0223-2025-MINEDU/SG, de fecha 24 de enero de 2025, la señora Gavilano Iglesias Doris, secretaria general del Ministerio de Educación, remite opinión solicitada, quien adjunta Informe N° 00126-2025-MINEDU/SG-OGAJ elaborado por la Oficina General de Asesoría Jurídica del Ministerio de Educación.

- ✓ Con Oficio N.° D 00228-2025-MIMP, de fecha 04 de febrero de 2025, el señor James Raphael Morales Campos, secretario general del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, remite opinión solicitada, Informe N° D000056-2025-MIMP-OGAJ, elaborado por la Oficina General de Asesoría Jurídica y el Informe N° D000005-2025-MIMP-DVMPV-FLAM, elaborado por el Despacho Viceministerial de Poblaciones Vulnerables, para conocimiento y fines pertinentes.

Proyecto de ley 8897/2024-CR

- ✓ Con Oficio N° 70-APPTOE-2024, de fecha 16 de setiembre de 2024, el señor Freddy Luis Ascanoa Rojas, presidente de la Asociación de profesionales, promotores de tutoría y orientación, remite Informe de Opinión técnica N° 03-2024-APPTOE, respecto al referido proyecto de ley.

- ✓ Con Oficio N° 005-2025-SUNEDU-DS, de fecha 7 de enero de 2025, el señor Manuel Enemecio Castillo Venegas, superintendente de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, Informe N° 00010-2025-SUNEDU-SG-OAJ, elaborado por la Oficina de Asesoría Jurídica, mediante el cual se da respuesta al requerimiento.

- ✓ Con Oficio N° D 0085-2025-MIMP-SG, de fecha 16 de enero de 2025, James Raphael Morales Campos, secretario general del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, se adjunta informe técnico N° D000001-2025-MIMP-DPVLV-DEHM, elaborado por la Dirección de

Políticas para una Vida Libre de Violencia, respecto al proyecto de ley 8897/2024-CR.

✓ Con Oficio N° 390-2025-JUS/SG, de fecha 28 de enero de 2025, George G. Otsu Sánchez, secretario general del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, adjunta informe legal N° 775-2024-JUS/DGDNCR elaborado por la Dirección General de Desarrollo Normativo y Calidad Regulatoria del Viceministerio de Justicia

✓ Con Oficio N° 011-2025- CRPLM, de fecha 8 de abril de 2025, el Lic. Hannover Vela Vásquez, Decano del Colegio Regional de profesores de Lima Metropolitana, remite opinión sobre el proyecto de ley 8897/2024-CR.

IV. MARCO NORMATIVO

4.1. Constitución Política del Perú (Artículos 1, 13, 14, 44 y 79)

4.2. Ley General de Educación (Ley 28044, artículos 7, 18, 35 y 36). Artículo 7: Derecho a una formación integral, en ambientes seguros y libres de violencia. Artículo 18: Obligación del Estado de promover acciones de tutoría y orientación educativa. Artículos 35 y 36: Reconocimiento del rol de docentes tutores y de profesionales complementarios.

4.3. Ley 29719, Ley que promueve la convivencia sin violencia en las instituciones educativas

4.4. Ley 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar

4.5. Código de los Niños y Adolescentes (D.S. N.° 003-2020-MIMP). Principio del interés superior del niño (artículo IX del título preliminar). Exige al Estado garantizar entornos escolares seguros, protectores y emocionalmente saludables.

4.6. Ley 29944, Ley de Reforma Magisterial

4.7. RVM N.° 212-2020-MINEDU (Lineamientos de Tutoría y Orientación Educativa).

4.8. D.S. N.° 013-2022-MINEDU
4.9. Exp. N.° 00538-2019-PA/TC (Fundamento 4, 6, 8, 12 y 17)
4.10. Exp. N. ° 00091-2005-PA/TC
4.11. Exp. N.° 00005-1997-PA/TC
4.12. Exp. N.° 01975-2018-PA/TC (Fundamento 7 y 8)
4.13. Exp. N.° 0018-2021-PI/TC, fundamento 179
4.14. Convención sobre los Derechos del Niño (ONU). Artículo 19: Protección contra toda forma de violencia. Artículos 28 y 29: Derecho a una educación integral en ambientes seguros.
4.15. Observación General N.° 13 del Comité de los Derechos del Niño (2011). Los Estados deben implementar políticas de prevención de la violencia escolar con personal especializado y servicios articulados intersectorialmente.

5. ANÁLISIS DE LA PROPUESTA

5.1. ANÁLISIS TÉCNICO

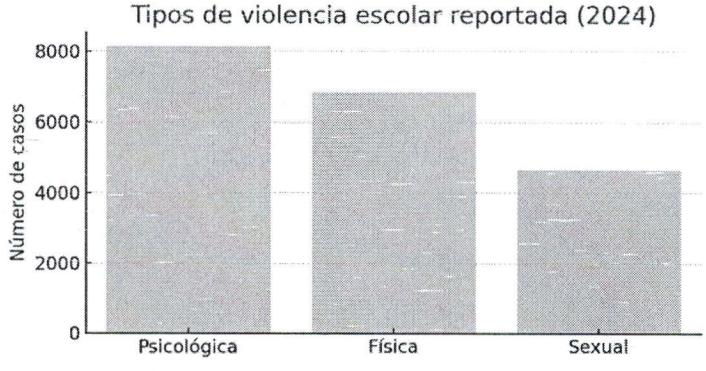
En el contexto actual del sistema educativo, se evidencian múltiples desafíos que afectan directamente el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes. Problemas como la violencia escolar, el bullying, el embarazo adolescente, el consumo de sustancias psicoactivas, los trastornos de salud mental, la delincuencia juvenil y la deserción escolar configuran un conjunto de **factores de riesgo en la población escolar** que requieren atención urgente y especializada.

Los **factores de riesgo en la población escolar** comprenden un conjunto de condiciones personales, familiares, escolares y sociales que afectan negativamente el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes, y que aumentan su vulnerabilidad frente a situaciones de violencia, abandono, exclusión o daño emocional. Entre estos factores se encuentran la violencia escolar, el acoso o bullying, la delincuencia juvenil, el consumo de sustancias psicoactivas, el embarazo en la adolescencia, los trastornos de salud mental como la depresión infantil, y la deserción escolar. Estos

riesgos, al no ser detectados ni atendidos oportunamente, comprometen el bienestar socioemocional del estudiante, su permanencia en el sistema educativo y su proyección de vida. En este contexto, resulta fundamental implementar políticas públicas sostenidas que prioricen la prevención, la intervención temprana y el acompañamiento emocional desde el entorno escolar, mediante profesionales especializados que actúen de forma articulada con las familias y los servicios intersectoriales.

En el país la violencia escolar y el bullying representan problemáticas significativas que afectan a la comunidad educativa. Durante el año 2024, se registraron un total de **19,642 denuncias de violencia escolar**, de las cuales **10,708** correspondieron a agresiones entre estudiantes y **8,934** a actos cometidos por personal de las instituciones educativas. Los tipos de violencia más reportados fueron la psicológica (8,150 casos), física (6,851) y sexual (4,641)[1].

Tipos de violencia escolar (2024)



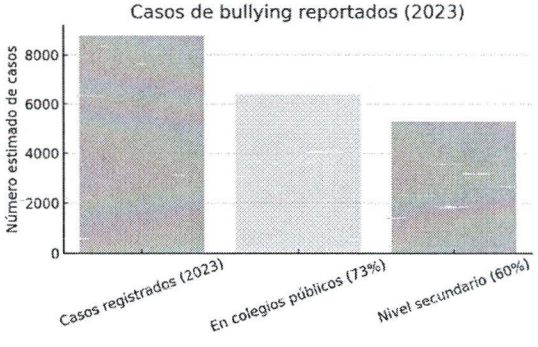
La violencia psicológica representa el mayor número de casos reportados, seguida por la física y la sexual.

[1] Infobae. (2025, febrero 25). *Más de 19 mil casos de violencia escolar fueron reportados en 2024, según el Minedu*. https://www.infobae.com/peru/2025/02/25/inicio-del-ano-escolar-2025-mas-de-19-mil-casos-de-violencia-escolar-fueron-reportados-en-2024-segun-minedu/

En cuanto al bullying, entre enero y septiembre de 2023, se registraron 8,785 denuncias en el portal **SíseVe** del Ministerio de Educación, siendo la cifra más alta desde la creación de la plataforma en 2013. De estos casos, más del 73% correspondieron a colegios públicos, y seis de cada diez ocurrieron en el nivel secundario[2].

Además, se estima que el 61% de los escolares ha sido víctima de ciberbullying, siendo los adolescentes entre 12 y 14 años los más afectados. Esta situación se agrava por la falta de profesionales especializados en las instituciones educativas, ya que el 97% de los colegios no cuenta con psicólogos, a pesar de que su presencia es obligatoria por ley desde hace más de una década[3] .

Casos de bullying registrados



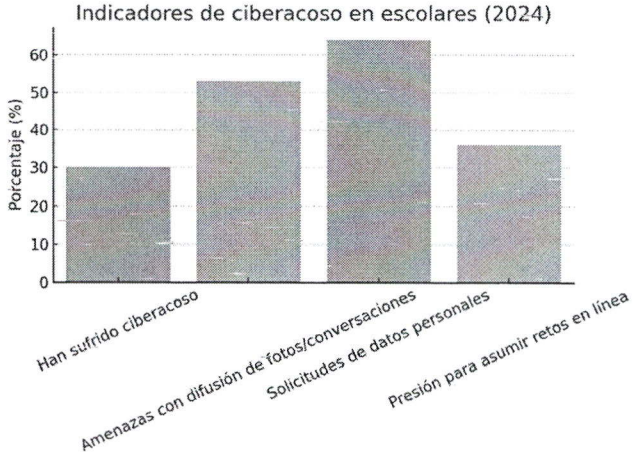
El 73% de los casos ocurrieron en colegios públicos y el 60% en nivel secundario, con un total de 8,785 reportes en SíseVe.

[2] El Comercio. (2023, septiembre 18). *Más de seis de cada 10 casos de bullying en colegios del Perú se registran en secundaria*. https://elcomercio.pe/lima/sucesos/ecdata-mas-de-seis-de-cada-10-casos-de-bullying-en-colegios-del-peru-se-registran-en-secundaria-noticia/

[3] El Peruano. (2023, octubre 11). *El 61% de escolares revela haber sido víctima de ciberbullying*. https://www.elperuano.pe/noticia/222079-el-61-de-escolares-revela-haber-sido-victima-de-ciberbullying-informe

De otro lado, el ciberacoso escolar ha emergido como una problemática alarmante que afecta significativamente a la población estudiantil, al ritmo que avanza las tecnologías de la información y comunicaciones. Un estudio realizado por eBIZ en 2024, titulado "Percepciones y usos de las redes sociales de escolares en el Perú", reveló que aproximadamente el **30% de los estudiantes** entre 8 y 15 años han experimentado algún tipo de ciberacoso. Además, el **53%** de los encuestados informó haber recibido amenazas relacionadas con la difusión de fotos o conversaciones privadas, mientras que el **64%** indicó que se les solicitaron datos personales, y el **36%** fueron instados a asumir o cumplir retos en línea[4].Este fenómeno se ha intensificado con el incremento del uso de redes sociales y plataformas digitales entre los menores, especialmente tras la pandemia de COVID-19.

Indicadores de ciberacoso



Un 30% de estudiantes de entre 8 y 15 años ha sufrido ciberacoso, siendo común la amenaza con difundir material privado, solicitudes de datos personales y presión para asumir retos en línea.

[4] eBIZ. (2024, abril 10). *El 30% de los escolares han experimentado ciberacoso*. https://ebiz.pe/noticias/el-30-de-los-escolares-han-experimentado-ciberacoso/

A diferencia del acoso escolar convencional, las consecuencias del ciberacoso son más severas, incluyendo trastornos emocionales como ansiedad, depresión, aislamiento social y, en casos extremos, pensamientos suicidas. La falta de preparación y presencia de especialistas en las instituciones educativas para abordar esta problemática agrava la situación, evidenciando la necesidad urgente de implementar políticas y programas que promuevan un entorno digital seguro para los estudiantes.

Respecto a los indicadores sobre el bienestar de niñas, niños y adolescentes evidencian una situación crítica que requiere intervención estructural. En el ámbito del embarazo adolescente, durante el año 2023 se reportaron más de **42,000 partos en adolescentes de entre 11 y 19 años**, según el Ministerio de Salud. De esa cifra, al menos **809 nacimientos corresponden a niñas de entre 10 y 14 años**, lo que representa no solo un grave problema de salud pública, sino una vulneración directa de derechos fundamentales, dado que en muchos de estos casos existen antecedentes de violencia sexual. Estos embarazos tempranos perpetúan ciclos de pobreza, abandono escolar y exclusión social, especialmente en regiones como Loreto, Ucayali y La Libertad.

En cuanto a la salud mental, los trastornos emocionales y la depresión infantil se han incrementado notablemente tras la pandemia. El Ministerio de Salud reporta **280,917 casos de tratamiento por depresión durante 2023**, de los cuales el **17.27 % corresponde a menores de edad**. Además, según estimaciones de especialistas, **1.7 millones de niños y adolescentes entre 6 y 17 años presentan síntomas depresivos**, como tristeza persistente, aislamiento, falta de motivación, cambios en el apetito, trastornos del sueño y bajo rendimiento escolar. Esta situación no solo compromete su salud y desarrollo, sino que también eleva el riesgo de abandono escolar, consumo de sustancias y conductas auto lesivas, incluyendo pensamientos suicidas.

Respecto al consumo de alcohol y drogas, el Ministerio de Salud registra **39,488 casos de trastornos por consumo de alcohol en adolescentes atendidos en 2023**. Según estudios nacionales, el **29.5% de los escolares de nivel secundario ha consumido alcohol al menos una vez**, y la edad promedio de inicio de consumo es entre los **13 y 14 años**. El acceso fácil, la presión social y la falta de orientación emocional agravan este panorama, especialmente en entornos escolares sin profesionales preparados para atender estos riesgos de manera temprana[5].

La deserción escolar es otra problemática que evidencia la fragilidad del sistema educativo frente a estos factores. Según la Defensoría del Pueblo, entre 2022 y 2023 más de **46,000 estudiantes abandonan el sistema educativo**, y se estima que **360,962 niñas, niños y adolescentes entre 4 y 18 años no acceden a ningún tipo de educación formal**, siendo las zonas rurales, amazónicas y urbano-marginales las más afectadas. Las causas van desde la violencia escolar, el embarazo temprano, las enfermedades mentales no tratadas, hasta la necesidad de trabajo infantil y falta de acompañamiento familiar[6].

Este conjunto de datos evidencia la urgencia de aprobar normativas que permitan resolver de manera concreta estos problemas socioeducativos, además que, establecen reales de prevención. En este contexto, la figura del promotor de tutoría se configura como un agente preventivo clave, con competencias pedagógicas, psicoeducativas y de acompañamiento. A diferencia del psicólogo escolar —con un enfoque clínico y especializado (psicólogo educativo) a intervenciones específicas—, sin embargo, el promotor de tutoría actúa desde el aula, identifica señales de alerta y

[5] Ministerio de Salud. (2024, febrero). *Establecimientos de Minsa atendieron casi 40,000 casos de trastornos por consumo de alcohol durante el 2023*. https://www.gob.pe/institucion/minsa/noticias/866539-establecimientos-de-minsa-atendieron-casi-40-000-casos-de-trastornos-por-consumo-de-alcohol-durante-el-2023

[6] Defensoría del Pueblo. (2023). *Deserción escolar en el Perú: más de 360 mil niños y adolescentes no reciben educación*. Recuperado de https://www.infobae.com/peru/2023/10/24/desercion-escolar-en-el-peru-mas-de-360-mil-ninos-y-adolescentes-no-reciben-educacion/

articula con las redes de apoyo (manejo intersectorial) para el abordaje en la solución de problemas o caso positivo identificado. Su rol es proactivo, formativo y transversal, y permite abordar temáticas como el bullying, el embarazo adolescente, el consumo de drogas, el pandillaje, la violencia de género, la discriminación, entre otros riesgos. De otro lado, es importante el registro obligatorio de incidencias en un libro de control, el traslado progresivo de estudiantes infractores a otras modalidades educativas, y la conformación de comités institucionales de bienestar socioemocional, todo ello en línea con los enfoques de atención integral, corresponsabilidad intersectorial y protección de derechos.

En ese sentido, con la aprobación del texto sustitutorio, se presenta una alternativa crucial para enfrentar esta problemática. Dando realce a la presencia de profesionales especializados (tutores) que permitirá desarrollar estrategias efectivas de prevención, detección y atención del ciberacoso, garantizando el bienestar integral de los estudiantes incluso en un entorno digital.

Las cifras evidencian con claridad la necesidad urgente de adoptar medidas efectivas para prevenir y atender los problemas socioeducativos que afectan a la comunidad escolar. En ese sentido, corresponde rechazar las opiniones desfavorables que, desde una visión reduccionista, se enfocan exclusivamente en el aspecto presupuestario. Contrario a lo sostenido, la presente iniciativa no vulnera el principio de prohibición de generar gasto público sin iniciativa del Ejecutivo, ya que su implementación está diseñada de manera progresiva y puede ejecutarse con cargo al presupuesto del Ministerio de Educación, mediante las modificaciones presupuestales que la misma norma autoriza. Además, el Tribunal Constitucional ha establecido precedentes que avalan la capacidad del Congreso para legislar en materias de alta prioridad social, siempre que se respeten criterios de gradualidad, sostenibilidad y razonabilidad en la asignación de recursos.

Tampoco hay duplicidad normativa, como erróneamente sostienen algunos sectores. Las resoluciones y lineamientos actuales del MINEDU (como la RVM N.° 212-2020-MINEDU) carecen de rango legal, son inestables y dependen de decisiones administrativas. La aprobación de esta ley dotará de jerarquía normativa, sostenibilidad y fuerza vinculante a una política de prevención que hoy opera de forma fragmentaria y sin respaldo institucional permanente.

Las propuestas legislativas acumuladas han recibido opiniones técnicas favorables de diversas entidades, como la Asociación de Promotores de Tutoría (APPTOE), el Colegio de Profesores del Perú, la Defensoría del Pueblo, gobiernos regionales, municipalidades, el MIMP y organizaciones docentes como el SUTEP. Todos coinciden en que esta norma es necesaria para cerrar brechas estructurales, fortalecer el enfoque preventivo desde la escuela, y responder a la complejidad de los riesgos que enfrentan nuestros estudiantes. A su vez, propuestas legislativas complementarias (PL 4291, 5411, 7461, 7835, 8423, 8897, 10904) han sido acumuladas en un texto sustitutorio consensuado, que refuerza el marco normativo y asegura su coherencia técnica y operativa.

Por tanto, el texto sustitutorio planteado representa una respuesta normativa coherente, articulada y basada en evidencia frente a una realidad educativa adversa, que permitirá no solo mejorar la convivencia escolar, sino también garantizar el derecho de niñas, niños y adolescentes a una educación con acompañamiento emocional, pedagógico y protector, alineada con los principios del Proyecto Educativo Nacional al 2036, la Constitución y los tratados internacionales suscritos por el Perú.

5.2. ANÁLISIS DEL MARCO NORMATIVO

El marco normativo vigente en materia educativa reconoce la importancia de garantizar una formación integral de los estudiantes, como lo establecen la **Constitución Política del Perú**, la **Ley General de Educación (Ley 28044)** y la **Ley 29719**, orientada a promover una

convivencia sin violencia en las escuelas. No obstante, dichas normas presentan vacíos normativos, desarticulación funcional y ausencia de disposiciones con rango legal que aseguren de manera obligatoria la implementación de políticas preventivas y la asignación de recursos humanos especializados en el ámbito socioemocional, por tanto, con las disposiciones señaladas en el texto sustitutorio, se fortalece la intervención de los profesionales en tutoría y de la orientación educativa y bienestar socioemocional.

El **artículo 13 de la Constitución** señala que "***la educación tiene como finalidad el desarrollo integral de la persona humana***", mientras que el **artículo 1 consagra la defensa de la dignidad humana** como fin supremo del Estado. Asimismo, el **artículo IX del Título Preliminar del Código de los Niños y Adolescentes** establece el principio del interés superior del niño, que debe orientar toda política educativa. En esa línea, la presente iniciativa legislativa cumple con este mandato constitucional al establecer una respuesta estructural, sostenida y especializada frente a problemáticas sociales como el bullying, el embarazo adolescente, el consumo de drogas, la discriminación y la deserción escolar.

A pesar de la existencia de directivas administrativas como la **RVM N.° 212-2020-MINEDU** (Lineamientos de Tutoría y Orientación Educativa), estas carecen de fuerza legal vinculante y han mostrado limitada eficacia frente al incremento sostenido de la violencia escolar, la afectación emocional y los riesgos sociales que enfrentan niñas, niños y adolescentes. Tal como ha señalado la Comisión de Educación en su predictamen, **estas resoluciones son frágiles, de aplicación desigual y sujetas a modificaciones políticas o presupuestales**, lo que evidencia la necesidad de una norma con rango legal que asegure la continuidad, sostenibilidad y cobertura nacional de la política de tutoría preventiva.

En este contexto, la ley propuesta **no duplica funciones ni invade competencias sectoriales**, sino que complementa el marco legal vigente mediante el reconocimiento explícito del promotor de tutoría como agente

pedagógico con funciones específicas en prevención, acompañamiento y bienestar socioemocional. Esto se ajusta al principio de **corresponsabilidad intersectorial** previsto en la Ley General de Educación y se alinea con el **Proyecto Educativo Nacional al 2036**, que establece como eje transversal el bienestar emocional de los estudiantes.

Asimismo, la propuesta legislativa ha acumulado y armonizado diversos proyectos de ley con objetivos convergentes (PL 4291, 5411, 5501, 7461, 7835, 8423, 8897, 10904), consolidando un texto sustitutorio bajo disposiciones con coherencia normativa y operativa.

Se precisa, desde el punto de vista constitucional, el texto propuesto no vulnera el artículo 79, ya que su ejecución está prevista de forma progresiva y dentro del marco presupuestario del sector Educación, tal como lo ha reconocido el propio Tribunal Constitucional en casos en que la protección de derechos fundamentales justifica una asignación presupuestaria racional y escalonada. Además, el texto autoriza explícitamente las modificaciones presupuestales requeridas, sin imponer gastos inmediatos o adicionales al Tesoro Público.

Finalmente, del diagnóstico expuesto en el análisis técnico y el respaldo técnico favorable expresado por múltiples entidades demuestra un consenso institucional sobre la urgencia y pertinencia de las propuestas legislativas. El análisis normativo concluye que la aprobación de esta iniciativa es jurídicamente viable, necesaria, proporcional y ajustada a los principios constitucionales, internacionales y educativos, contribuyendo a fortalecer el derecho a una educación con bienestar emocional, en un entorno seguro, equitativo y protector.

5.3. ANÁLISIS DE LAS OPINIONES RECIBIDAS Y OTROS DOCUMENTOS

Proyecto de Ley 4291/2022-CR

✓ Con **Oficio 000239-2023-SERVIR-PE,** de fecha 4 de abril de 2023, la señora Ana Isabel Pari Morales, presidente ejecutiva del Consejo Directivo de la PCM, emite opinión técnica sobre el Proyecto de Ley 4291/2022-CR

> *La Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR), a través de informes técnicos,* ***emite una opinión desfavorable*** *sobre el Proyecto de Ley N.° 4291/2022-CR, que propone la conversión de plazas eventuales a plazas orgánicas de personal administrativo y promotores de tutoría y orientación educativa bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo N.° 276, en instituciones educativas de educación básica, institutos, escuelas de educación superior, centros de educación técnico productiva y unidades de gestión educativa local a nivel nacional. SERVIR sostiene que esta propuesta es jurídicamente inviable por múltiples razones de fondo y forma. En primer lugar, señala que la conversión directa de contratos eventuales a plazas orgánicas sin mediar concurso público vulnera el principio constitucional de igualdad ante la ley, consagrado en el artículo 103 de la Constitución Política del Perú, al establecer privilegios laborales no justificados para un grupo específico de trabajadores, en desmedro de los derechos de otros servidores del Estado que acceden a plazas mediante procedimientos meritocráticos.*
>
> *Además, SERVIR advierte que esta propuesta desnaturaliza el modelo de tránsito progresivo hacia el nuevo régimen del Servicio Civil (LSC), regulado por la Ley N.° 30057, cuyo objetivo es consolidar un sistema meritocrático, transparente y orientado a la*

eficiencia del aparato estatal. Bajo este marco, SERVIR recuerda que toda incorporación al empleo público debe realizarse por concurso abierto de méritos, conforme lo establece la Ley del Servicio Civil y la Ley Marco del Empleo Público (Ley N.° 28175), lo cual asegura la idoneidad y permanencia del personal basado en criterios objetivos. Igualmente, hace notar que las plazas contempladas en el proyecto de ley tienen carácter estructural y permanente, por lo que deben estar previamente aprobadas en el Presupuesto Analítico de Personal (PAP) del Ministerio de Educación; por tanto, SERVIR recomienda que se solicite la opinión del Ministerio de Economía y Finanzas antes de seguir adelante con la iniciativa.

Asimismo, SERVIR señala que el régimen del Servicio Civil incluye mayores beneficios económicos y compensaciones (como vacaciones, aguinaldos y compensación por tiempo de servicios), por lo que la conversión de las plazas bajo el Decreto Legislativo N.° 276 implica un retroceso en términos de eficiencia administrativa y equidad remunerativa. Se resalta también que una eventual aprobación del proyecto podría afectar la sostenibilidad fiscal del Estado, al crear obligaciones permanentes sin una adecuada previsión presupuestaria.

En conclusión, SERVIR considera que el Proyecto de Ley N.° 4291/2022-CR resulta incompatible con el marco normativo vigente en materia de empleo público, desarticula la reforma del Servicio Civil, contraviene principios constitucionales y representa un riesgo presupuestal para el Estado. Por ello, se recomienda que cualquier decisión legislativa sobre este tema sea evaluada coordinadamente con el Ministerio de Educación, como ente rector del sistema educativo, y con el Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos, encargada de emitir opinión sobre el PAP de las entidades del sector público.

La postura emitida por SERVIR respecto al Proyecto de Ley 4291/2022-CR resulta parcial y descontextualizada frente a la realidad estructural del sector educativo público, pues ignora que las plazas eventuales a las que se refiere la propuesta han venido siendo ocupadas de manera continua e ininterrumpida por personal que cumple funciones permanentes, muchas veces durante más de una década, y que en la práctica ya han adquirido el derecho a la estabilidad laboral bajo los principios del régimen 276. Pretender someter nuevamente a concurso público a estos trabajadores, que han demostrado idoneidad y compromiso en el servicio, constituye una forma de precarización del trabajo público y desconoce el principio de razonabilidad consagrado en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Además, la aplicación rígida del régimen del Servicio Civil (Ley N.° 30057) en este caso concreto no considera la necesidad de garantizar continuidad y eficacia en la gestión educativa, especialmente en zonas rurales o de difícil acceso, donde la rotación de personal debilita los servicios esenciales. Por tanto, el proyecto de ley no vulnera el principio de mérito, sino que lo complementa al reconocer la experiencia acumulada como un criterio válido de mérito funcional, contribuyendo así a la consolidación de un Estado más justo y eficiente.

✓ Con **Oficio 1381-2023-EF/10.01**, de fecha 4 de abril de 2023, el señor Alex Alonso Contreras Miranda, ministro de Economía y Finanzas, emite opinión técnica sobre el Proyecto de Ley 4291/2022-CR

> *El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a través de su Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos (DGGFRH), emite una opinión crítica sobre el Proyecto de Ley N.° 4291/2022-CR, el cual propone la conversión de plazas eventuales a plazas orgánicas para personal administrativo y de promoción de tutoría y orientación educativa bajo el régimen del Decreto Legislativo N.° 276. En su análisis, el MEF señala que dicha iniciativa no realiza un adecuado análisis técnico, financiero ni presupuestal que determine el impacto económico de su*

implementación, ni tampoco identifica las fuentes de financiamiento necesarias para sostenerla en el tiempo. Esto contraviene el marco normativo presupuestal vigente, que exige como condición para el inicio del trámite de cualquier norma con impacto fiscal, una evaluación de sostenibilidad presupuestaria.

Además, el informe indica que la conversión de plazas eventuales a orgánicas implica una modificación estructural en la naturaleza del vínculo laboral, lo cual requiere que dichas plazas estén debidamente financiadas y registradas en instrumentos como el Cuadro para Asignación de Personal (CAP) y el Presupuesto Analítico de Personal (PAP). Asimismo, el MEF advierte que el proyecto es incompatible con la reforma del servicio civil (Ley N.° 30057), ya que, al pretender regularizar automáticamente plazas ocupadas por personal contratado, se vulnera el principio meritocrático que rige el acceso al empleo público, y se debilita el sistema único de incorporación por concurso público y evaluación objetiva.

En relación específica al personal de promoción de tutoría y orientación educativa, el MEF también señala que su incorporación al régimen del Decreto Legislativo N.° 276 no se alinea con la normativa vigente en materia de contratación de estos profesionales, quienes no necesariamente cumplen con las condiciones del régimen administrativo general. Finalmente, se concluye que el proyecto de ley no resulta viable desde el punto de vista técnico, financiero ni legal, y se recomienda que cualquier intento de conversión de plazas sea coordinado con SERVIR, el Ministerio de Educación y sustentado en evaluaciones presupuestarias previas que garanticen la sostenibilidad del gasto.

La postura del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) frente al Proyecto de Ley N.° 4291/2022-CR adolece de una visión reduccionista que prioriza criterios fiscales por encima de la realidad laboral y el

principio de equidad en el acceso y permanencia al servicio público. Si bien es legítimo exigir sostenibilidad presupuestal, el argumento de que la conversión de plazas eventuales a orgánicas contradice la reforma del servicio civil ignora que dichas plazas ya son desempeñadas, de manera continua y permanente, por trabajadores que cumplen funciones estructurales dentro del sistema educativo, y cuya estabilidad ha sido vulnerada por años de contratación precaria. Rechazar su incorporación bajo la excusa de falta de evaluación presupuestaria no solo perpetúa esta situación injusta, sino que omite que muchos de estos servidores ya han sido reconocidos en la práctica por su mérito, experiencia e idoneidad funcional.

Además, la exigencia de un análisis costo-beneficio previo al trámite del proyecto, aunque válida en abstracto, resulta desproporcionada cuando se trata de derechos laborales legítimamente adquiridos y que deben ser regularizados con responsabilidad social y justicia laboral, tal como lo establece la propia Constitución en su reconocimiento a la protección del trabajo digno. En ese sentido, el proyecto de ley no representa un gasto adicional arbitrario, sino una medida de corrección histórica frente a una práctica estatal que ha institucionalizado la precariedad en el sector educativo.

Proyecto de ley 4711/2022-CR

✓ Con Oficio N° D000344-2023-MIDIS-DM, de fecha 05 de mayo de 2023, el señor Julio Javier Demartini Montes, ministro de Desarrollo e Inclusión Social, remite opinión técnica sobre el Proyecto de Ley 4711/2022-CR, adjunta el Informe N° D000271-2023-MIDIS-OGAJ, en términos siguientes:

> *El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, teniendo en consideración el ordenamiento jurídico vigente y los fundamentos expuestos, concluye que el Proyecto de Ley 4711/2022-CR "Ley contra el bullying escolar", excede las competencias del Ministerio*

de Desarrollo e Inclusión Social según lo contenido en la Ley N° 29792, Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social; en vista que aborda la temática sobre educación y violencia escolar, que son competencia exclusiva del Ministerio de Educación y sus instancias competentes. Recomienda sugerir a la Comisión de Educación, Juventud y Deporte recabar la opinión sobre la referida iniciativa legislativa del Ministerio de Educación, destacando la experiencia del SíSeVe contra la violencia escolar en el marco de sus funciones y competencias. Asimismo, incide se tome en consideración y adecuar, en lo que corresponda, el proyecto de ley a lo estipulado en el Decreto Supremo N° 007-2022-JUS, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 26889, Ley Marco para la Producción y Sistematización Legislativa.

Respecto a la opinión del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, se manifiesta que esta resulta limitada al considerar que el Proyecto de Ley excede sus competencias, sin considerar que la violencia escolar, incluyendo el bullying, constituye un fenómeno multidimensional que requiere un enfoque intersectorial. Si bien la competencia principal en materia educativa recae en el Ministerio de Educación, corresponde al MIDIS, en el marco de sus funciones de protección social y atención a poblaciones vulnerables, articular esfuerzos para prevenir y atender situaciones que afectan el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes en contextos escolares. Por tanto, su participación no se excluye, sino que resulta complementaria y necesaria.

✓ Con Oficio 00258-2023-SINEACE/P, de fecha 17 de mayo de 2023, el señor Carlos Barreda Tamayo, presidente del Consejo Directivo Ad Hoc Sineace, remite opinión técnica sobre el Proyecto de Ley 4711/2022-CR, adjunta el Informe Legal N° 000233-2023-SINEACE/P-GG-OAJ, en términos siguientes:

La postura del SINEACE se limita a señalar que el Proyecto de Ley N.° 4711/2022-CR aborda materias vinculadas a funciones propias

del Ministerio de Educación, aclarando que su competencia institucional se circunscribe a la certificación de competencias profesionales y la acreditación de la calidad educativa. En tal sentido, al no involucrar directamente aspectos relacionados con los procesos de evaluación o acreditación de la gestión educativa, el proyecto escapa al ámbito funcional del SINEACE, sin que ello implique una objeción de fondo a su contenido, sino únicamente una precisión sobre el alcance de sus atribuciones conforme a la Ley N.° 28740 y la Política Nacional de Educación Superior y Técnico Productiva.

✓ Con Oficio 2574-2023-MINEDU/SG, de fecha 22 de junio de 2023, la señora Norma Karina Carpio Sotomayor, Secretaria General (e) del Ministerio de Educación, remite opinión técnica sobre el Proyecto de Ley 4711/2022-CR, adjunta el Informe 00766-2023-MINEDU/SG-OGAJ, en términos siguientes:

*A partir de lo señalado por la DIGE en el Informe N.° 00121-2023-MINEDU/ VMGI-DIGC-DIGE, se concluye que el Proyecto de Ley N.° 4711/2022-CR, **no es viable**, por lo siguiente:*

(i) La propuesta de modificación de los artículos 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 11 de la Ley N.° 29719, Ley que promueve la convivencia sin violencia en las instituciones educativas, se encuentra actualmente regulada en diversos dispositivos normativos del sector educación, tales como la Ley N.° 30797, Ley que promueve la educación inclusiva, el Decreto Supremo N.° 007-2021-MINEDU, que modifica el Reglamento de la Ley N.° 28044, Ley General de Educación, y el Decreto Supremo N.° 004-2018-MINEDU, que aprueba los Lineamientos para la gestión de la convivencia escolar, la prevención y atención de la violencia contra niñas, niños y adolescentes.

(ii) La propuesta de incorporación de los artículos 14, 15, 16 y 17 a la Ley N.° 29719, se encuentra regulada en diversa normativa emitida por el Sector Educación, tales como el Decreto Supremo N.° 006-2021-MINEDU, que aprueba los Lineamientos para la gestión escolar de Instituciones Educativas Públicas de Educación Básica, la Resolución Ministerial N.° 189-2021-MINEDU, que aprueba las Disposiciones para los Comités de Gestión Escolar en las Instituciones Educativas Públicas de Educación Básica, y el Decreto Supremo N.° 004-2018-MINEDU, que aprueba los Lineamientos para la gestión de la convivencia escolar, la prevención y atención de la violencia contra niñas, niños y adolescentes, que incluye los protocolos para la atención de los casos violencia.

(iii) La incorporación del artículo 18 en la Ley N.° 29719, que hace referencia a la instalación de cámaras de video vigilancia en aulas y áreas educativas colisiona con el derecho a la privacidad de las personas, generando un clima de desconfianza y afectación a la convivencia escolar.

(iv) Resulta necesario fortalecer el rol y las capacidades de las autoridades de las instituciones educativas y de los docentes, con el objetivo de promover acciones que favorezcan la autorregulación, el desarrollo socioemocional, y la sensibilización y/o desnaturalización ante los hechos de violencia escolar, promoviendo una cultura de reporte que asegure la toma de acciones para brindar una atención oportuna, en el marco de los protocolos del sector.

El Ministerio de Educación sostiene que el Proyecto de Ley 4711/2022-CR no resulta viable, al considerar que gran parte de sus disposiciones ya se encuentran reguladas por normativa vigente del sector, como la Ley N.° 30797, la Ley General de Educación y diversos decretos supremos y resoluciones ministeriales que abordan la convivencia escolar y la prevención de la violencia. Además, observa que la incorporación de

cámaras de video vigilancia podría vulnerar el derecho a la privacidad, afectando el ambiente educativo. Finalmente, resalta la necesidad de fortalecer capacidades institucionales para afrontar el bullying desde una perspectiva preventiva y pedagógica, dentro del marco normativo ya existente.

En ese sentido, se manifiesta que la posición del Ministerio de Educación, al declarar inviable el Proyecto de Ley N.° 4711/2022-CR por supuesta duplicidad normativa, omite reconocer que la normativa vigente ha resultado insuficiente para erradicar el fenómeno del bullying escolar, como lo evidencian los miles de casos reportados anualmente a través del portal SíSeVe. **El hecho de que existan normas previas no impide al legislador perfeccionar, actualizar o reforzar el marco jurídico frente a una problemática persistente.**

✓ Con Oficio D001185-2023-MIMP-SG, de fecha 21 de junio de 2023, el señor José Ernesto Montalva de Falla, secretario general del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, remite opinión técnica sobre el Proyecto de Ley 4711/2022-CR, adjunta el Informe D000525-2023-MIMP-OGAJ, en términos siguientes:

> *La postura del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables respecto al Proyecto de Ley N.° 4711/2022-CR señala que su contenido no se enmarca directamente dentro de las competencias específicas del sector, aunque reconoce que, en el marco de la promoción y protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, puede formular observaciones o comentarios. Si bien no asume una competencia sustantiva sobre la regulación del bullying escolar, el ministerio deja abierta la posibilidad de intervenir desde una perspectiva complementaria de protección de derechos, en coordinación con el Ministerio de Educación.*

Al respecto, se señala que la afirmación del MIMP de que el Proyecto de Ley 4711/2022-CR no se encuentra dentro de su ámbito de competencias resulta

contradictoria con su propio reconocimiento de que tiene como función la promoción y protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. La violencia escolar, incluido el bullying, constituye una forma de vulneración de dichos derechos, por lo que su prevención y atención sí involucra al MIMP como ente rector en políticas de protección integral. En ese sentido, su participación no solo es pertinente, sino necesaria para garantizar un enfoque transversal de derechos y corresponsabilidad institucional en la lucha contra toda forma de violencia hacia la niñez y adolescencia.

Proyecto de ley 5411/2022-CR

- ✓ Con Oficio Nro. 316-2023-GOREMAD/GR, de fecha 14 de agosto de 2023, el señor Luis Otsuka Salazar, Gobernador Regional de Madre de Dios, quien adjunta Informe N°032-2023-GOREMAD/DRE- DGP/EES-JLG para los fines pertinentes, según detalle:

  > *La Especialista en Educación Secundaria, Mg. Jackeline Luna Guillén, mediante Informe N° 032 - 2023- GOREMAD/DRE-DGP/EES-JLG,* ***emite opinión técnica favorable*** *respecto al Proyecto de Ley N.° 5411/2022-CR, señalando que el área de Tutoría y Orientación Educativa sí aborda de manera articulada temas de prevención como el consumo de drogas, embarazo adolescente, orientación vocacional y discriminación, en contra de lo sostenido en el documento evaluado. Asimismo, respalda su postura con base en normas emitidas por el MINEDU, como la RVM N.° 212-MINEDU y los decretos supremos N.° 004-2018-MINEDU y N.° 013-2022-MINEDU, que sustentan el trabajo preventivo y de atención en casos de violencia en el ámbito escolar.* ***Finalmente, resalta que el proyecto de ley tiene un enfoque macro, orientado a prevenir problemáticas sociales recurrentes en la población estudiantil, por lo que considera pertinente su aprobación y la asignación de presupuesto para su ejecución.*** ***(Subrayado es nuestro)***

DICTAMEN FAVORABLE RECAÍDO EN LOS PROYECTOS DE LEY 4291/2022-CR, 4711/2022-CR, 5411/2022-CR, 5501/2022-CR, 7461/2023-CR, 7835/2023-CR, 8423/2023-CR, 8886/2024-CR, 8897/2024-CR y 10904/2024-CR POR EL QUE, CON TEXTO SUSTITUTORIO, SE PROPONE LA "LEY QUE DESIGNA AL PROFESIONAL RESPONSABLE DE LA TUTORÍA, LA ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y EL BIENESTAR SOCIOEMOCIONAL DEL ESTUDIANTE EN LAS INSTITUCIONES Y PROGRAMAS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA, Y ESTABLECE DISPOSICIONES PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE FACTORES DE RIESGO EN LA POBLACIÓN ESCOLAR"

✓ Con Oficio N° 117-APPTOE-2023, de fecha 12 de diciembre de 2023, el señor Freddy Luis Ascanoa Rojas, presidente de la Asociación de profesionales promotores de tutoría y orientación educativa, corre traslado el Oficio N° D000146-2023-MML-OGSC, que incluye a la vez el Informe N° D 000109-2023-MML-GDH, referido a la opinión técnica sobre el Proyecto de Ley 5411/2022-CR *(Ley que Promueve la Prevención de Riesgo escolar desde las tutorías y Bienestar socioemocional en las Instituciones Educativas*), en términos siguientes:

> *En el documento remitido por la Asociación de Profesionales Promotores de Tutoría y Orientación Educativa del Perú (APPTOE) a la Comisión de Educación, Juventud y Deporte, contiene opiniones institucionales favorables respecto al Proyecto de Ley N.° 5411/2022-CR, denominado "Ley que promueve la prevención de riesgo escolar desde la tutoría y el bienestar socioemocional en las instituciones educativas". Resalta que, a través de dicho proyecto, se propone establecer mecanismos preventivos desde la labor tutorial para enfrentar problemáticas que afectan a estudiantes de educación básica, tales como embarazo adolescente, consumo de drogas, trata de personas, violencia sexual, discriminación, pandillaje, orientación vocacional deficiente y debilitamiento del entorno familiar. En ese sentido, la norma proyectada plantea la incorporación progresiva de profesionales especializados en bienestar socioemocional y prevención de la violencia en todas las instituciones educativas públicas del país.*
>
> *En ese sentido, la Gerencia de Desarrollo Humano de la Municipalidad Metropolitana de Lima, por medio de sus subgerencias de Mujer y Familia, y de Bienestar y Promoción Social e Inclusión,* ***ha emitido opinión técnica favorable*** *respecto al contenido de la propuesta legislativa. Estas instancias municipales consideran que la propuesta se encuentra alineada con las funciones que les son propias en cuanto a la atención de poblaciones vulnerables, la protección de derechos y la promoción*

del bienestar de niñas, niños y adolescentes. Asimismo, destacan que la ley permitiría institucionalizar desde el marco normativo un enfoque de acompañamiento afectivo, cognitivo y socioemocional que fortalezca el desarrollo integral de los estudiantes.

No obstante, junto con el respaldo general al proyecto, se formulan algunas observaciones técnicas que deberían ser atendidas antes de su eventual aprobación. Entre ellas, se advierte que el artículo 5.3 del proyecto hace referencia a la Ley 28542, norma que ha sido derogada, por lo que se recomienda eliminarla como base legal. También se señala una duplicidad de contenido entre los artículos 4.° y 6.°, y se sugiere reformular este último para incluir información desagregada sobre los casos reportados, lo que facilitaría la formulación de políticas públicas más precisas. Además, se propone que, en el proceso de selección del personal especializado, se excluya a postulantes con antecedentes por violencia de género, violencia familiar o demandas por alimentos.

Finalmente, ***se concluye que el Proyecto de Ley 5411/2022-CR es pertinente y necesario para abordar de forma integral los riesgos que enfrentan los estudiantes desde una perspectiva preventiva, mediante acciones articuladas en el ámbito educativo.*** *La Gerencia de Desarrollo Humano, en función de sus competencias, emite una opinión favorable sobre la iniciativa legislativa y recomienda su remisión al Congreso de la República, incorporando las observaciones señaladas para optimizar su redacción y aplicación.*

✓ Con Oficio N° 000481-2023-SINEACE/P, de fecha 18 de julio de 2023, el señor Carlos Barreda Tamayo, presidente del Consejo Directivo Ad Hoc Sineace, quien adjunta Informe Legal N° 000336-2023-SINEACE/P-GG-OAJ respecto a la opinión sobre el Proyecto de Ley 5411/2022-CR, en términos siguientes:

DICTAMEN FAVORABLE RECAÍDO EN LOS PROYECTOS DE LEY 4291/2022-CR, 4711/2022-CR, 5411/2022-CR, 5501/2022-CR, 7461/2023-CR, 7835/2023-CR, 8423/2023-CR, 8886/2024-CR, 8897/2024-CR y 10904/2024-CR POR EL QUE, CON TEXTO SUSTITUTORIO, SE PROPONE LA "LEY QUE DESIGNA AL PROFESIONAL RESPONSABLE DE LA TUTORÍA, LA ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y EL BIENESTAR SOCIOEMOCIONAL DEL ESTUDIANTE EN LAS INSTITUCIONES Y PROGRAMAS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA, Y ESTABLECE DISPOSICIONES PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE FACTORES DE RIESGO EN LA POBLACIÓN ESCOLAR"

El SINEACE, expresó que el Proyecto de Ley N.° 5411/2022-CR, orientado a prevenir el riesgo escolar a través de la tutoría y el bienestar socioemocional, ***corresponde ser evaluado por el Ministerio de Educación****, ya que excede las funciones de dicha entidad, centradas en la acreditación de la calidad educativa y certificación de competencias. Además, advierte que la propuesta podría generar implicancias presupuestales, por lo que recomienda remitirla al MINEDU para su análisis técnico y normativo.*

✓ Con Oficio N° D000157-2023-IN-SG, de fecha 8 de agosto de 2023, la señora Tabata Dulce Vivanco Del Castillo, secretaria general del Ministerio del Interior, remite informe N° 1636-2023/IN/OGAJ elaborado por la Oficina General de Asesoría Jurídica de ese Ministerio, el cual contiene la opinión sobre el citado proyecto de ley, en términos siguientes:

> *El Ministerio del Interior, mediante opinión emitida por su Oficina General de Asesoría Jurídica, concluye que el Proyecto de Ley N.° 5411/2022-CR —que promueve la prevención de riesgo escolar desde la tutoría y el bienestar socioemocional—* ***no corresponde a su ámbito competencial, ya que sus funciones se circunscriben al orden interno, orden público y seguridad ciudadana.*** *Aunque reconoce que algunas acciones preventivas contempladas en la propuesta podrían articularse con la Policía Nacional del Perú, enfatiza que la evaluación técnica y normativa del proyecto debe ser asumida por el Ministerio de Educación, entidad rectora en materia educativa.*

✓ Con Oficio N° 91-APPTOE-2023, de fecha 1 de setiembre de 2023, el señor Freddy Luis Ascanoa Rojas, presidente de la Asociación de profesionales, promotores de tutoría y orientación, remite Informe de Opinión técnica N° 02-2023-APPTOE, respecto al proyecto de ley 5411/2022-CR, en términos siguientes:

DICTAMEN FAVORABLE RECAÍDO EN LOS PROYECTOS DE LEY 4291/2022-CR, 4711/2022-CR, 5411/2022-CR, 5501/2022-CR, 7461/2023-CR, 7835/2023-CR, 8423/2023-CR, 8886/2024-CR, 8897/2024-CR y 10904/2024-CR POR EL QUE, CON TEXTO SUSTITUTORIO, SE PROPONE LA "LEY QUE DESIGNA AL PROFESIONAL RESPONSABLE DE LA TUTORÍA, LA ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y EL BIENESTAR SOCIOEMOCIONAL DEL ESTUDIANTE EN LAS INSTITUCIONES Y PROGRAMAS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA, Y ESTABLECE DISPOSICIONES PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE FACTORES DE RIESGO EN LA POBLACIÓN ESCOLAR"

La Asociación de Profesionales Promotores de Tutoría y Orientación Educativa del Perú (APPTOE), expresa su respaldo al Proyecto de Ley 5411/2022-CR. *Considera que dicha iniciativa legislativa propone establecer la "Ley que promueve la prevención de riesgo escolar desde la tutoría y bienestar socioemocional en las instituciones educativas", con un enfoque preventivo y formativo orientado a fortalecer la atención emocional y cognitiva de los estudiantes en los niveles de educación básica.*

La APPTOE resalta que este proyecto representa una respuesta urgente y necesaria frente a diversas problemáticas que afectan al alumnado, tales como el embarazo adolescente, la violencia escolar, la trata de personas, el pandillaje, el consumo de drogas, la deserción escolar y otras situaciones de riesgo. En ese sentido, considera fundamental la incorporación de profesionales especializados en prevención de la violencia y promoción del bienestar socioemocional, así como promotores en tutoría preventiva, en cada institución educativa pública del país.

Asimismo, la asociación sostiene que la aprobación de esta norma permitirá institucionalizar mecanismos de acompañamiento efectivo e integral a favor del desarrollo cognitivo y socioemocional de los estudiantes, contribuyendo con ello al cumplimiento de los objetivos educativos nacionales y a la mejora de la convivencia escolar. Finalmente, hace un llamado al Congreso de la República para que priorice la aprobación del proyecto de ley, asegurando los recursos necesarios para su implementación eficaz a nivel nacional.

✓ Con Oficio N° D0003906-2023-SG- MINSA, de fecha 13 de setiembre de 2023, el señor José Ernesto Vidal Fernández, secretario general del Ministerio de Salud, remite Informe N° D000925-2023-OGAJ-MINSA elaborado por la Oficina General de Asesoría Jurídica de ese Ministerio, el cual contiene la opinión sobre el citado proyecto de ley, en términos

DICTAMEN FAVORABLE RECAÍDO EN LOS PROYECTOS DE LEY 4291/2022-CR, 4711/2022-CR, 5411/2022-CR, 5501/2022-CR, 7461/2023-CR, 7835/2023-CR, 8423/2023-CR, 8886/2024-CR, 8897/2024-CR y 10904/2024-CR POR EL QUE, CON TEXTO SUSTITUTORIO, SE PROPONE LA "LEY QUE DESIGNA AL PROFESIONAL RESPONSABLE DE LA TUTORÍA, LA ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y EL BIENESTAR SOCIOEMOCIONAL DEL ESTUDIANTE EN LAS INSTITUCIONES Y PROGRAMAS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA, Y ESTABLECE DISPOSICIONES PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE FACTORES DE RIESGO EN LA POBLACIÓN ESCOLAR"

siguientes:

El Ministerio de Salud, emitió su opinión institucional respecto al Proyecto de Ley 5411/2022-CR, reconociendo la importancia de los objetivos planteados por la propuesta legislativa, pero considera que varios de los aspectos regulados por la iniciativa legislativa exceden las competencias del sector Educación y recaen dentro del ámbito funcional del sector Salud.

La Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública, mediante informes técnicos, observó que la atención del bienestar socioemocional, así como la prevención del embarazo adolescente, el trabajo infantil y otras situaciones de riesgo, forman parte de las funciones del MINSA y no deben ser asumidas por los docentes o profesionales designados por el Ministerio de Educación. Asimismo, se advierte que el proyecto propone la creación de cargos que ya han sido previstos en la Ley N.° 29719 —como los psicólogos escolares—, y se recomienda evitar duplicidades o superposiciones de funciones. También se señala la necesidad de precisar y limitar adecuadamente el alcance de las disposiciones complementarias derogatorias y de incluir procesos de capacitación, articulación intersectorial y definición de riesgos específicos en el reglamento de la futura norma.

En ese contexto, el MINSA sugiere conformar una mesa de trabajo multisectorial que involucre a varios ministerios (Educación, Salud, Mujer, Interior, MIDIS, Justicia) y organismos como la Defensoría del Pueblo, con el fin de reformular técnicamente el proyecto de ley. Esta recomendación busca asegurar que la normativa propuesta se ajuste al marco constitucional, legal y funcional de cada sector involucrado, garantizando una implementación eficaz y sin duplicidad de competencias.

DICTAMEN FAVORABLE RECAÍDO EN LOS PROYECTOS DE LEY 4291/2022-CR, 4711/2022-CR, 5411/2022-CR, 5501/2022-CR, 7461/2023-CR, 7835/2023-CR, 8423/2023-CR, 8886/2024-CR, 8897/2024-CR y 10904/2024-CR POR EL QUE, CON TEXTO SUSTITUTORIO, SE PROPONE LA "LEY QUE DESIGNA AL PROFESIONAL RESPONSABLE DE LA TUTORÍA, LA ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y EL BIENESTAR SOCIOEMOCIONAL DEL ESTUDIANTE EN LAS INSTITUCIONES Y PROGRAMAS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA, Y ESTABLECE DISPOSICIONES PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE FACTORES DE RIESGO EN LA POBLACIÓN ESCOLAR"

El Ministerio de Salud considera que el Proyecto de Ley 5411/2022-CR debe ser reevaluado, ya que contiene disposiciones que se superponen con funciones propias del sector salud. Por ello, recomienda que la propuesta sea reformulada mediante una mesa técnica intersectorial, a fin de mejorar su diseño normativo y asegurar su viabilidad desde un enfoque integral y competencial.

Al respecto la Comisión señala que, si bien el Ministerio de Salud sostiene que la atención del bienestar socioemocional y la prevención de riesgos como el embarazo adolescente o el trabajo infantil son de competencia exclusiva del sector salud, esta afirmación desconoce que dichas problemáticas son transversales y requieren un abordaje educativo integral desde el entorno escolar, conforme a los principios de corresponsabilidad intersectorial establecidos en la Ley General de Educación y en el Proyecto Educativo Nacional al 2036.

En ese sentido, **el proyecto de ley no invade competencias, sino que complementa acciones mediante la incorporación de profesionales especializados en las escuelas, orientados a la promoción y prevención, sin reemplazar funciones clínicas ni asistenciales propias del MINSA**. Además, la referencia a la Ley 29719 no desvirtúa la necesidad del proyecto, pues aquella se limita al acoso escolar, mientras que **la iniciativa legislativa en discusión propone una estrategia más amplia de intervención socioemocional y formativa.** Por tanto, lejos de superponerse, el proyecto contribuye a cerrar brechas en la atención del bienestar emocional desde la comunidad educativa, sin perjuicio de que se fortalezca la coordinación intersectorial como medida complementaria, no condicionante para su viabilidad normativa.

✓ Con Oficio N° 4189 – 2023-MINEDU/SG, de fecha 19 de octubre de 2023, la señora Ana Grimanesa Reátegui Ñaupari, secretaria general del Ministerio de Educación, remite Informe N° 01195-2023-MINEDU/SG-OGAJ, elaborado por la Oficina General de Asesoría Jurídica del Ministerio de Educación respecto a opinión técnica del referido proyecto,

DICTAMEN FAVORABLE RECAÍDO EN LOS PROYECTOS DE LEY 4291/2022-CR, 4711/2022-CR, 5411/2022-CR, 5501/2022-CR, 7461/2023-CR, 7835/2023-CR, 8423/2023-CR, 8886/2024-CR, 8897/2024-CR y 10904/2024-CR POR EL QUE, CON TEXTO SUSTITUTORIO, SE PROPONE LA "LEY QUE DESIGNA AL PROFESIONAL RESPONSABLE DE LA TUTORÍA, LA ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y EL BIENESTAR SOCIOEMOCIONAL DEL ESTUDIANTE EN LAS INSTITUCIONES Y PROGRAMAS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA, Y ESTABLECE DISPOSICIONES PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE FACTORES DE RIESGO EN LA POBLACIÓN ESCOLAR"

en términos siguientes:

> *El Ministerio de Educación, mediante el Informe N.° 01195-2023-MINEDU/SG-OGAJ, elaborado por su Oficina General de Asesoría Jurídica y remitido a través del Oficio N.° 4189-2023-MINEDU/SG, emitió una opinión técnica desfavorable respecto al Proyecto de Ley N.° 5411/2022-CR, que propone la prevención del riesgo escolar desde la tutoría y el bienestar socioemocional en las instituciones educativas. Tras revisar el contenido del proyecto y los informes especializados de diversas direcciones del MINEDU, se concluye que la materia propuesta ya se encuentra regulada por un amplio marco normativo vigente, como los Lineamientos de Tutoría y Orientación Educativa (RVM N.° 212-2020-MINEDU), los Lineamientos de Educación Sexual Integral (RVM N.° 169-2021-MINEDU), las normas para la contratación de promotores de tutoría (RSG N.° 2079-2014-MINEDU), entre otros. Además, se advierte que el Ministerio ya viene implementando acciones concretas mediante programas presupuestales orientados a la prevención de la violencia, así como estrategias de acompañamiento socioemocional en el ámbito educativo. En ese sentido, se considera que el contenido del proyecto resulta redundante, innecesario y podría generar conflictos con las disposiciones actualmente vigentes, afectando la continuidad de políticas públicas ya desarrolladas. Por ello, el MINEDU concluye que el Proyecto de Ley N.° 5411/2022-CR* ***no resulta viable*** *desde el punto de vista jurídico ni operativo, y recomienda su no aprobación.*

Al respecto, la Comisión sostiene que la posición del Ministerio de Educación (MINEDU), expresada en el Informe N.° 01195-2023-MINEDU/SG-OGAJ, al manifestar que no resulta viable por supuestamente encontrarse su contenido ya regulado en normas sectoriales vigentes. No obstante, dicha conclusión resulta jurídicamente equivocada, pues ignora que los instrumentos administrativos mencionados —como lineamientos, resoluciones viceministeriales o

manuales técnicos— carecen de rango legal, carácter vinculante general y fuerza normativa para obligar a su cumplimiento uniforme a nivel nacional. De conformidad con el principio de jerarquía normativa consagrado en el artículo 51 de la Constitución Política del Perú, solo la ley puede imponer obligaciones generales a todos los ciudadanos y entidades del Estado, lo cual justifica plenamente la necesidad de una norma con rango legal para institucionalizar la tutoría preventiva y el bienestar socioemocional como política educativa obligatoria.

Se debe precisar que el Proyecto de Ley N.° 5411/2022-CR no genera duplicidad normativa, sino que busca otorgar respaldo legal y sostenibilidad presupuestal a una política que hoy depende de programas focalizados y de decisiones administrativas contingentes. Además, responde al mandato constitucional de *proteger a la persona humana y su dignidad* (artículo 1), así como *al derecho de los educandos a una formación integral, respetuosa de su identidad y con buen trato psicológico y físico* (artículo 15). En este marco, **la propuesta legislativa garantiza la designación progresiva de profesionales especializados en bienestar socioemocional y tutoría preventiva en todas las instituciones públicas de educación básica, lo que actualmente no se encuentra asegurado bajo la normativa administrativa invocada por el MINEDU**.

Desde la perspectiva del derecho a la educación consagrado en los artículos 13 y 14 de la Constitución, y del principio de interés superior del niño recogido en el artículo IX del Título Preliminar del Código de los Niños y Adolescentes, **el Estado tiene la obligación de adoptar medidas normativas adecuadas para prevenir la violencia, la deserción escolar y otras situaciones de riesgo que afectan a la infancia y adolescencia en edad escolar.** Por tanto, el argumento de "normas ya existentes" es desconocer las graves limitaciones en cobertura, eficacia y obligatoriedad que presenta la regulación vigente en materia de convivencia escolar, prevención en violencia, y contradice el deber estatal del Ministerio de Educación, de garantizar políticas públicas efectivas y

sostenibles. En consecuencia, la Comisión, rechaza las observaciones del MINEDU, además de respaldar al proyecto de ley 5411/2022-CR que se justifica plenamente como una medida normativa necesaria, razonable y constitucionalmente legítima.

✓ Con Oficio N° 423 – 2023/CEN SUTEP, de fecha 20 de setiembre de 2023, el señor Lucio Castro Chipana, secretario General del Sindicato Único de Trabajadores del Perú emite respaldo al Proyecto de Ley 5411/2022-CR.

> *El SUTEP, **expresa su respaldo al Proyecto de Ley 5411/2022-CR**, que promueve la prevención de riesgos escolares desde la tutoría y el bienestar socioemocional. Aunque reconoce la existencia de normativas previas sobre tutoría, convivencia escolar y bienestar emocional, advierte que estas se encuentran desarticuladas y han resultado insuficientes ante el incremento de la violencia en las escuelas. En consecuencia, el sindicato considera necesario contar con una ley que articule y fortalezca estas acciones, y por ello emite una opinión favorable al proyecto.*

✓ Con Oficio N° 546–2023-MPC/GDH, de fecha 06 de octubre de 2023, la señora Vanessa Villarán Jeanneau, gerente de Desarrollo Humano, de la Municipalidad del Callao, quien eleva al Congreso de la República opinión favorable al proyecto de ley 5411/2022-CR.

> *La Municipalidad Provincial del Callao, mediante el Oficio N.° 546-2023-MPC-GM, dirigido al presidente de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte del Congreso de la República, expresa su **opinión favorable respecto al Proyecto de Ley 5411/2022-CR**, la municipalidad destaca que el proyecto se alinea con los principios de atención integral a la infancia y adolescencia, y que responde de manera concreta a las necesidades que enfrentan los estudiantes en el entorno escolar, especialmente en contextos urbanos con alta exposición a riesgos sociales como la violencia, el consumo de sustancias, el pandillaje y la deserción escolar.*

DICTAMEN FAVORABLE RECAÍDO EN LOS PROYECTOS DE LEY 4291/2022-CR, 4711/2022-CR, 5411/2022-CR, 5501/2022-CR, 7461/2023-CR, 7835/2023-CR, 8423/2023-CR, 8886/2024-CR, 8897/2024-CR y 10904/2024-CR POR EL QUE, CON TEXTO SUSTITUTORIO, SE PROPONE LA "LEY QUE DESIGNA AL PROFESIONAL RESPONSABLE DE LA TUTORÍA, LA ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y EL BIENESTAR SOCIOEMOCIONAL DEL ESTUDIANTE EN LAS INSTITUCIONES Y PROGRAMAS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA, Y ESTABLECE DISPOSICIONES PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE FACTORES DE RIESGO EN LA POBLACIÓN ESCOLAR"

La comuna resalta que, si bien existen normas y programas orientados a la convivencia escolar y al bienestar emocional, muchas veces estos resultan insuficientes o carecen de mecanismos de implementación sostenibles. En tal sentido, el proyecto de ley es valorado por su enfoque preventivo y por su intención de institucionalizar la presencia de profesionales especializados en cada institución educativa pública, como parte de una estrategia nacional articulada que promueva el desarrollo cognitivo, emocional y social de los estudiantes.

La Municipalidad del Callao concluye que el Proyecto de Ley N.° 5411/2022-CR es pertinente y necesario, ya que fortalecerá el rol de la escuela como espacio protector, reducirá factores de riesgo que afectan el rendimiento y la permanencia escolar, y contribuirá al bienestar integral del alumnado. Por ello, recomienda su aprobación por parte del Congreso de la República.

✓ Con Oficio N° 10666–2023-GRLL-GGR-GRE, de fecha 29 de octubre de 2023, el señor Julio Martin Camacho Paz, de la Gerencia Regional de Educación del Gobierno Regional La Libertad, quien adjunta Informe N° 000012-2023-GRLL-GGR-GRE-SGGP-JCT, respecto a la opinión favorable al Proyecto de Ley N° 5411/2022–CR.

*El Gobierno Regional de La Libertad, a través de su Gerencia Regional de Educación, ha emitido una **opinión favorable** respecto al **Proyecto de Ley N.° 5411/2022-CR**. En el análisis se señala que, si bien existen normas como la Ley 29719 y el D.S. 004-2018-MINEDU para la gestión de la convivencia y la atención de casos de violencia escolar, el proyecto de ley propone una intervención más amplia y articulada. Se destaca su carácter integral, al abordar no solo la prevención de violencia escolar y violencia sexual en niños y niñas, sino también problemáticas como el consumo de drogas, el pandillaje adolescente, la trata de personas, el embarazo adolescente, la discriminación y el debilitamiento del entorno*

familiar. La propuesta plantea la implementación de un equipo multidisciplinario en todas las instituciones educativas públicas del país, lo cual representa una innovación normativa de alcance nacional.

La Gerencia Regional de Educación concluye que el Proyecto de Ley 5411/2022-CR es de suma importancia y representa una medida necesaria para enfrentar de forma integral los múltiples riesgos que afectan a los estudiantes.

✓ Con Oficio N° 022–2024-CRPLM, de fecha 24 de mayo de 2024, el señor Lic. Hannover Vela Vásquez, Decano del Colegio Regional de profesores de Lima Metropolitana, remite opinión sobre el proyecto de ley 5411/2022-CR, proyecto de ley 7461/2023-CR y proyecto de ley 7835/2023- CR.

El Colegio Regional de Profesores de Lima Metropolitana (CRPLM), presenta su ***opinión institucional favorable*** *respecto al* ***Proyecto de Ley 5411/2022-CR, así como a los proyectos 7461/2023-CR y 7835/2023-CR, los cuales tienen en común la finalidad de fortalecer la tutoría, orientación educativa y el bienestar socioemocional en el ámbito escolar.*** *En el caso del Proyecto de Ley 5411, se resalta que su objeto es promover el desarrollo integral de los estudiantes, incorporando estrategias preventivas frente a problemáticas como embarazo adolescente, pandillaje, consumo de drogas, trata de personas, violencia escolar, discriminación y otras situaciones de riesgo, a través de la designación progresiva de profesionales especializados en tutoría preventiva en todas las instituciones públicas del país.*

El CRPLM valora positivamente que estos proyectos reconozcan el papel fundamental del promotor de tutoría como figura distinta y complementaria al psicólogo escolar, con un perfil pedagógico y funciones preventivas específicas que actualmente no están

suficientemente desarrolladas por la normativa vigente. Asimismo, resalta que la Ley N.° 29719 (modificada por la Ley N.° 31902) aborda exclusivamente el bullying, sin abarcar de manera integral otras formas de violencia y riesgos sociales que afectan el bienestar del estudiantado. En esa línea, los proyectos analizados —y en particular el 5411/2022-CR— permiten ampliar el enfoque de intervención desde la escuela y darle rango legal a un servicio que actualmente opera de manera limitada o fragmentada.

El Colegio de Profesores concluye que la implementación de promotores de tutoría con respaldo legal es necesaria para cubrir vacíos normativos en la prevención de riesgos escolares y el fortalecimiento de la convivencia escolar. Además, considera acertada la propuesta de registrar indicadores como embarazos adolescentes, consumo de drogas y violencia ejercida por estudiantes en el sistema SISEVE, dado que actualmente no se reportan. Por tanto, emite una ***opinión institucional favorable*** *al Proyecto de Ley 5411/2022-CR y considera que su aprobación contribuirá a formar ciudadanos con una cultura de paz, bienestar emocional y valores sólidos.*

✓ Con Oficio N° 2024–2024-EF/10.01, de fecha 21 de agosto de 2024, el señor José Arista Arbildo, ministro de Economía y Finanzas, adjunta Informe N° 0556-2024-EF/50.04 de la Dirección de Normatividad de la mencionada Dirección General, referente a la opinión técnica del citado proyecto.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), reconoce el propósito de la propuesta, desde el enfoque presupuestario, por lo que advierte serias observaciones relacionadas con su impacto financiero y su falta de viabilidad económica.

En el análisis técnico se señala que el proyecto no presenta un análisis costo-beneficio debidamente cuantificado ni identifica las

fuentes de financiamiento requeridas para cubrir los gastos permanentes que implicaría su implementación, tales como contratación de personal especializado, capacitaciones, materiales didácticos, adecuación de espacios y seguimiento del programa. Además, se afirma que el contenido del proyecto ***vulnera principios fundamentales del equilibrio presupuestario****, como los recogidos en el artículo 78 de la Constitución y en la Ley 31954 de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2024. También se advierte que la iniciativa legislativa* ***transgrede el artículo 79 de la Constitución****, al tratarse de una propuesta congresal que genera gasto público sin iniciativa del Ejecutivo, lo cual está expresamente prohibido.*

El MEF concluye considerando inviable su aprobación en los términos actuales, recomendándose su revisión integral bajo criterios de sostenibilidad financiera y respeto al marco constitucional.

Respecto a la posición del MEF sobre la inviabilidad del Proyecto de Ley 5411/2022-CR, basada en criterios presupuestarios, resulta objetable por varias razones. En primer lugar, el proyecto contempla su implementación progresiva, por ende, la disposición presupuestal debe ser resultado de las asignaciones debidamente programadas y planificadas, lo que respeta el principio de gradualidad y no impone un gasto inmediato, con lo cual no vulnera el artículo 79 de la Constitución.

En segundo lugar, el análisis del MEF omite considerar el alto costo social de la inacción del Estado ante problemas como la violencia escolar, el embarazo adolescente y el deterioro de la salud mental estudiantil. Además, el proyecto responde al mandato constitucional de garantizar el derecho a una educación integral y la protección del menor (art. 13 y 44 de la Constitución). Por tanto, la iniciativa debió ser revisada con enfoque de derechos y sostenibilidad fiscal progresiva, considerándose el principio de progresividad de los derechos sociales, el interés superior del

niño y la obligación del Estado de garantizar el derecho a una educación integral, conforme lo establece el artículo 13 de la Constitución y los tratados internacionales suscritos por el Perú, tales como la Convención sobre los Derechos del Niño (artículos 3 y 19).

Proyecto de ley 5501/2022-CR

✓ Con Oficio N°211-2023-CNE, de fecha 5 de diciembre del 2023, el señor Luis Lescano Sáenz, presidente del Consejo Nacional de Educación, remite opinión técnica respecto al proyecto que propone la "Ley que establece tolerancia cero al acoso escolar", en términos siguientes:

> *El Consejo Nacional de Educación (CNE), ha emitido una opinión **desfavorable** respecto al Proyecto de Ley 5501/2022-CR, el cual propone establecer una política de "tolerancia cero" frente al acoso escolar, incluyendo la modificación del artículo 11 de la Ley 29719, para disponer la expulsión inmediata del estudiante agresor cuando haya más de tres incidencias registradas en el Libro de Registro de Incidencias. Asimismo, la propuesta legislativa plantea que el Ejecutivo actualice el reglamento de dicha ley en un plazo máximo de 30 días.*
>
> *En su análisis, el CNE reconoce el incremento de casos de acoso escolar tras la pandemia y la necesidad de tomar acciones firmes, pero señala que la propuesta legislativa se basa en una visión punitiva que contradice el enfoque formativo, restaurativo e inclusivo que debe regir el sistema educativo. Advierte que la sola anotación de incidencias no garantiza una debida investigación ni el establecimiento de responsabilidades, por lo que **la expulsión automática vulnera principios de debido proceso, presunción de inocencia y atención integral**, establecidos en la Ley N.° 29719 y su reglamento. Asimismo, recuerda que el entorno escolar debe ser un espacio para la reflexión, la autorregulación del*

comportamiento y la rehabilitación, no para el aislamiento definitivo del estudiante infractor.

El CNE subraya que el Ministerio de Educación, como ente rector de las políticas educativas, debe liderar acciones integrales de prevención, atención y rehabilitación frente a la violencia escolar, en coordinación con otras entidades del Estado, sin recurrir a medidas que excluyan a los estudiantes del sistema educativo sin una evaluación individualizada. Se resalta que cualquier reforma debe estar alineada con los principios del Proyecto Educativo Nacional al 2036, orientado a garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad.

El Consejo Nacional de Educación concluye que el Proyecto de Ley N.° 5501/2022-CR resulta inviable, ya que promueve una sanción automática y desproporcionada que no garantiza el respeto al debido procedimiento ni responde a un enfoque pedagógico y restaurativo**. Por ello, emite **opinión técnica desfavorable**, y **recomienda que cualquier modificación normativa en esta materia considere un abordaje integral y preventivo del acoso escolar, en lugar de una expulsión inmediata basada únicamente en registros administrativos.

✓ Con Oficio N° D001633-2023-MIMP-SG, de fecha 21 de agosto del 2023, el señor José Ernesto Montalva De Falla, secretario general del Ministerio de la mujer y poblaciones vulnerables, remite opinión técnica respecto al proyecto que propone la "Ley que establece tolerancia cero al acoso escolar", adjunto el Informe N° D000738-2023-MIMP-OGAJ, elaborado por la Oficina General de Asesoría Jurídica del sector, en términos siguientes:

*El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), remite su **opinión técnica sobre el Proyecto de Ley N.° 5501/2022-CR**,*

DICTAMEN FAVORABLE RECAÍDO EN LOS PROYECTOS DE LEY 4291/2022-CR, 4711/2022-CR, 5411/2022-CR, 5501/2022-CR, 7461/2023-CR, 7835/2023-CR, 8423/2023-CR, 8886/2024-CR, 8897/2024-CR y 10904/2024-CR POR EL QUE, CON TEXTO SUSTITUTORIO, SE PROPONE LA "LEY QUE DESIGNA AL PROFESIONAL RESPONSABLE DE LA TUTORÍA, LA ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y EL BIENESTAR SOCIOEMOCIONAL DEL ESTUDIANTE EN LAS INSTITUCIONES Y PROGRAMAS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA, Y ESTABLECE DISPOSICIONES PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE FACTORES DE RIESGO EN LA POBLACIÓN ESCOLAR"

el mismo que fue elaborada por la Oficina General de Asesoría Jurídica del MIMP.

En dicho informe se reconoce la gravedad del acoso escolar y la necesidad de adoptar medidas firmes para erradicarlo, sin embargo, señala que la expulsión automática del estudiante agresor, sin un proceso previo que evalúe las circunstancias y sin considerar la protección de derechos fundamentales, contraviene principios constitucionales y estándares internacionales en materia de derechos de la niñez y adolescencia. *Se advierte que esta medida podría vulnerar el derecho del menor agresor a la educación, a la reinserción social y a un debido proceso, y que tampoco garantiza una solución estructural al problema de la violencia escolar.*

El Ministerio enfatiza que las respuestas al acoso escolar deben ser integrales, restaurativas y preventivas, incluyendo mecanismos de rehabilitación, soporte psicosocial y educación en valores, tanto para la víctima como para el agresor. Por ello, considera que medidas punitivas como la expulsión definitiva no contribuyen a transformar las condiciones estructurales de violencia ni promueven cambios sostenibles en la convivencia escolar.

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables concluye que el Proyecto de Ley 5501/2022-CR, en su forma actual, ***no es viable****, ya que no garantiza el respeto a los derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes, especialmente el derecho a la educación y el interés superior del niño. Por tanto, emite una opinión* ***técnica desfavorable****, recomendando que cualquier iniciativa legislativa sobre acoso escolar esté orientada a un enfoque restaurativo, pedagógico y de protección integral.*

✓ Con Oficio N° 03505-2023-MINEDU/SG, de fecha 31 de agosto del 2023, el señor Eduardo Gómez García, secretario general del Ministerio de

DICTAMEN FAVORABLE RECAÍDO EN LOS PROYECTOS DE LEY 4291/2022-CR, 4711/2022-CR, 5411/2022-CR, 5501/2022-CR, 7461/2023-CR, 7835/2023-CR, 8423/2023-CR, 8886/2024-CR, 8897/2024-CR y 10904/2024-CR POR EL QUE, CON TEXTO SUSTITUTORIO, SE PROPONE LA "LEY QUE DESIGNA AL PROFESIONAL RESPONSABLE DE LA TUTORÍA, LA ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y EL BIENESTAR SOCIOEMOCIONAL DEL ESTUDIANTE EN LAS INSTITUCIONES Y PROGRAMAS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA, Y ESTABLECE DISPOSICIONES PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE FACTORES DE RIESGO EN LA POBLACIÓN ESCOLAR"

Educación, remite opinión técnica sobre la citada iniciativa legislativa, para tal efecto, adjunta Informe N° 01101-2023-MINEDU/SG-OGAJ, elaborado por la Oficina General de Asesoría Jurídica del sector, en términos siguientes:

> *La opinión técnica del MINEDU, contenida en el Informe 01101-2023-MINEDU/SG-OGAJ, cuestiona la viabilidad de esta propuesta, señalando que* ***la medida sancionadora propuesta es incompatible con el enfoque pedagógico y formativo que rige el sistema educativo peruano****. En lugar de priorizar procesos de diálogo, reparación y autorregulación, el proyecto opta por una lógica punitiva que podría afectar derechos fundamentales, como el derecho a la educación y el principio de interés superior del niño y adolescente.*
>
> *El Ministerio también observa que la actual Ley 29719 y su reglamento ya establecen mecanismos claros para prevenir, atender y sancionar casos de acoso escolar, incluyendo la posibilidad de aplicar medidas correctivas, siempre en el marco de procedimientos respetuosos del debido proceso y de la integridad de los estudiantes involucrados. Además,* ***resalta que toda política educativa debe garantizar un entorno seguro, inclusivo y respetuoso, en el que tanto víctimas como agresores reciban orientación y soporte para una convivencia escolar restaurativa.***
>
> *El Ministerio de Educación concluye que el Proyecto de Ley N.° 5501/2022-CR* ***no resulta viable****, por cuanto establece una sanción automática que vulnera el enfoque educativo inclusivo, el debido proceso y los derechos fundamentales de los estudiantes. Por tanto, emite* ***una opinión técnica desfavorable****, recomendando que cualquier reforma en la materia se oriente hacia estrategias integrales de prevención, atención y rehabilitación, antes que a medidas excluyentes o expulsivas.*

Si bien el MINEDU advierte que la expulsión automática de un estudiante agresor podría contravenir principios pedagógicos y derechos fundamentales, es necesario reconocer que el enfoque restaurativo no debe excluir la aplicación de medidas severas ante casos reiterados de acoso escolar, por ello, la Comisión, considera de vital importancia una mejor utilización e importancia del manejo del libro de incidencias, la misma que es considerada en el planteamiento del texto sustitutorio en el presente dictamen. Se debe precisar que el Proyecto de Ley 5501/2022-CR no busca sancionar sin debido proceso, sino establecer un marco de consecuencias claras y proporcionales, orientadas a proteger a las víctimas y garantizar un entorno escolar seguro, sin perjuicio de ello, la Comisión acepta parcialmente la observación, para el planteamiento del texto sustitutorio correspondiente, desde una óptica ***que garantice un entorno seguro, inclusivo y respetuoso, y que tanto víctimas como agresores (menores de edad) reciban orientación y soporte para una convivencia escolar restaurativa. En definitiva,*** se propone una redacción consensuada que combine el enfoque formativo con mecanismos eficaces de sanción progresiva, y que refuercen tanto la prevención como la protección integral de todos los estudiantes.

✓ Con Oficio N° 91-APPTOE-2023, de fecha 4 de setiembre de 2023, el señor Freddy Luis Ascanoa Rojas, presidente de la Asociación de profesionales, promotores de tutoría y orientación, remite Informe de Opinión técnica N° 03-2023-APPTOE, respecto al proyecto de ley 5501/2022-CR, en términos siguientes:

> *La Asociación de Profesionales Promotores de Tutoría y Orientación* ***expresa su respaldo al Proyecto de Ley 5501/2022-CR, fundamenta su apoyo señalando que, a pesar de la existencia de la Ley 29719 y su reglamento, los casos de acoso escolar no han disminuido significativamente y muchas veces no se aplican las sanciones correspondientes, lo que contribuye a la impunidad y revictimización****. En ese sentido, la asociación considera que la propuesta legislativa*

introduce una medida clara, objetiva y necesaria para prevenir la reincidencia de conductas violentas que afectan gravemente el bienestar y el desarrollo de los estudiantes.

La APPTOE concluye que el Proyecto de Ley 5501/2022-CR es pertinente y oportuno, ya que permitirá fortalecer los mecanismos de protección frente al acoso escolar y establecer consecuencias efectivas frente a conductas reiteradas de violencia. Por ello, ***emite una opinión favorable****, respaldando su aprobación en el Congreso como una medida que contribuirá a garantizar entornos escolares seguros y respetuosos.*

Proyecto de ley 7461/2023-CR

✓ Con Oficio N° 26-APPTOE-2023, de fecha 9 de abril de 2024, el señor Freddy Luis Ascanoa Rojas, presidente de la Asociación de profesionales, promotores de tutoría y orientación, remite Informe de Opinión técnica N° 01-2024-APPTOE, respecto al proyecto de ley 7461/2023-CR, en términos siguientes:

La Asociación de Profesionales Promotores de Tutoría y Orientación Educativa del Perú (APPTOE), emitió una ***opinión técnica favorable*** *al Proyecto de Ley 7461/2023-CR, el cual propone* ***incorporar al profesional de la tutoría, orientación educativa y bienestar socioemocional en la carrera pública magisterial****. Este respaldo se fundamenta en un análisis histórico, técnico y normativo, que destaca la necesidad de institucionalizar con rango de ley el rol preventivo y formativo que ejercen los promotores de tutoría en el sistema educativo.*

En su análisis, la APPTOE señala que, desde la desactivación de la Dirección de Tutoría y Orientación Educativa (DITOE) en 2015, la tutoría ha quedado fragmentada entre diversas normas técnicas del MINEDU (como la RVM N.° 212-2020-MINEDU y el D.S. N.° 013-

2022-MINEDU), las cuales carecen de articulación y estabilidad normativa, generando duplicidades, ineficiencia y un gasto público innecesario. La asociación sostiene que el proyecto de ley busca revertir esta situación mediante la creación de un marco legal único que unifique criterios, reduzca costos y fortalezca la prevención de riesgos escolares, como el bullying, el embarazo adolescente, la trata de personas, el consumo de drogas y otras formas de violencia y vulnerabilidad social.

Asimismo, la APPTOE refuta objeciones planteadas por otros sectores, como el MINEDU y el MINSA. ***Precisa que el rol de los promotores de tutoría es pedagógico y preventivo, distinto al trabajo clínico o terapéutico del psicólogo escolar, y que su intervención está orientada al fortalecimiento cognitivo, emocional y social del estudiante, dentro del ámbito educativo.*** *Además, aclara que la propuesta no genera nuevos gastos, ya que puede ejecutarse con el presupuesto actualmente asignado al sector educación, y se respalda en precedentes jurisprudenciales del Tribunal Constitucional que permiten al Congreso legislar en materia de gasto público bajo ciertas condiciones.*

La APPTOE concluye que el Proyecto de Ley 7461/2023-CR es necesario y urgente para dotar de rango legal y estabilidad institucional al trabajo de prevención educativa, garantizando su sostenibilidad y eficacia en beneficio de la comunidad escolar. Por ello, ***emite una opinión técnica favorable*** *y recomienda acumular este proyecto con el Proyecto de Ley N.° 5411/2022-CR, por sus objetivos complementarios, así como convocar a una mesa de trabajo especializada con participación de expertos en prevención escolar.*

La opinión favorable emitida por la APPTOE permite dar relevancia en el actual contexto educativo, donde los desafíos asociados a la salud

socioemocional, la violencia escolar y la deserción requieren respuestas estructurales y sostenidas. La propuesta del Proyecto de Ley 7461/2023-CR no solo visibiliza el rol estratégico del profesional de tutoría como agente formativo y preventivo, sino que ofrece una solución normativa que subsana años de desarticulación institucional. Incorporar a estos profesionales en la carrera pública magisterial representa un avance en términos de profesionalización, eficiencia del gasto y continuidad de políticas educativas. En esa línea, reforzar esta iniciativa legislativa con rango de ley permite garantizar que la labor preventiva no dependa de decisiones transitorias ni de marcos normativos frágiles, sino que se consolide como un eje transversal del sistema educativo nacional, con impacto directo en la calidad de vida, el rendimiento escolar y el bienestar integral de los estudiantes.

✓ Con Oficio N° 019 -2024/SUMACOL-P, de fecha 19 de mayo de 2024, la señora María Elena Aguilar Macizo, presidenta de la Sociedad Unida de Maestros contratados de Lima, remite opinión sobre el proyecto de ley sobre la "Ley que incorpora al profesional de la tutoría, orientación educativa y bienestar socioemocional *en la carrera pública magisterial*", en términos siguientes:

> *La Sociedad Unida de Maestros Contratados de Lima (SUMACOL), expresó su **opinión favorable** respecto al Proyecto de Ley 7461/2023-CR, que propone incorporar al profesional de la tutoría, orientación educativa y bienestar socioemocional en la carrera pública magisterial. La organización sustenta su respaldo en la importancia de institucionalizar legalmente el rol del tutor como agente formador y preventivo, reconociendo su impacto en la mejora de la convivencia escolar, la formación integral de los estudiantes y la promoción de valores en el entorno familiar.*
>
> *En su análisis, SUMACOL destaca que el proyecto de ley permite articular esfuerzos pedagógicos y preventivos a través de la incorporación de profesionales especializados en tutoría, quienes*

trabajarían directamente en la prevención de riesgos sociales como el pandillaje, el abandono escolar, la violencia familiar y otras conductas de riesgo. Asimismo, resalta que, a diferencia de los psicólogos escolares, los promotores de tutoría cumplen una función formativa y socioeducativa, actualmente desprovista de respaldo legal, lo que impide su fortalecimiento institucional. La organización también subraya que las normas técnicas existentes en materia de tutoría y bienestar socioemocional son dispersas, contradictorias y manipulables por gestiones políticas, lo que limita su efectividad.

SUMACOL concluye que el Proyecto de Ley 7461/2023-CR es ***viable y necesario****, ya que otorga respaldo normativo a un grupo de profesionales que cumplen un rol clave en la prevención de la violencia y en la promoción del desarrollo integral de los estudiantes. Además, propone que los promotores de tutoría ingresen a la carrera pública magisterial cumpliendo los requisitos de la Ley 29944, con una permanencia mínima de tres años en las instituciones educativas para garantizar continuidad en los procesos formativos.*

✓ Con Oficio N° 022-2024- CRPLM, de fecha 24 de mayo de 2024, el Lic. Hannover Vela Vásquez, Decano del Colegio Regional de profesores de Lima Metropolitana, remite opinión sobre el proyecto de ley 5411/2022-CR, proyecto de ley 7461/2023-CR y proyecto de ley 7835/2023- CR, en términos siguientes:

El Colegio Regional de Profesores de Lima Metropolitana (CRPLM), emitió una ***opinión institucional favorable*** *respecto a los Proyectos de Ley 7835/2023-CR, N.° 7461/2023-CR y N.° 5411/2022-CR. Estas iniciativas buscan consolidar la figura del promotor de tutoría y orientación educativa en el sistema educativo peruano, ya sea mediante su designación obligatoria en cada institución educativa pública, su incorporación a la Carrera Pública*

Magisterial o la promoción de la prevención de riesgos escolares desde el enfoque del bienestar socioemocional.

En su análisis, el CRPLM resalta que los tres proyectos tienen un eje común: reforzar el rol preventivo de la tutoría como herramienta pedagógica clave para enfrentar problemáticas como el embarazo adolescente, el pandillaje, el consumo de sustancias, la violencia escolar y la desintegración familiar. Sostiene que actualmente las normas sectoriales sobre tutoría y convivencia escolar (como la Ley 31902 y la Ley 29719) son limitadas, desarticuladas y centradas mayormente en la atención de casos cuando el daño ya está hecho, mientras que las nuevas propuestas legislativas impulsan un enfoque preventivo desde el acompañamiento socioemocional y la formación en valores.

Asimismo, destaca que la designación progresiva de estos profesionales, bajo criterios presupuestales sostenibles, permitirá mejorar el entorno educativo y aliviar la carga de funciones de otros actores escolares. También valora positivamente la propuesta de registrar en el sistema SISEVE no solo los casos de violencia entre estudiantes, sino también otras situaciones como embarazos adolescentes, consumo de drogas y pandillaje, que actualmente no son visibles en dicho sistema.

El Colegio Regional de Profesores de Lima Metropolitana concluye que existe una ***imperiosa necesidad de dar rango legal al trabajo de tutoría y orientación educativa****, dotándolo de estabilidad normativa y presupuesto sostenido. Considera que los tres proyectos de ley evaluados abordan de forma integral y complementaria los retos actuales de la escuela pública, por lo que emite una* ***opinión favorable a su aprobación*** *y destaca su potencial para fomentar una cultura de paz, respeto y bienestar integral en la comunidad educativa.*

DICTAMEN FAVORABLE RECAÍDO EN LOS PROYECTOS DE LEY 4291/2022-CR, 4711/2022-CR, 5411/2022-CR, 5501/2022-CR, 7461/2023-CR, 7835/2023-CR, 8423/2023-CR, 8886/2024-CR, 8897/2024-CR y 10904/2024-CR POR EL QUE, CON TEXTO SUSTITUTORIO, SE PROPONE LA "LEY QUE DESIGNA AL PROFESIONAL RESPONSABLE DE LA TUTORÍA, LA ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y EL BIENESTAR SOCIOEMOCIONAL DEL ESTUDIANTE EN LAS INSTITUCIONES Y PROGRAMAS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA, Y ESTABLECE DISPOSICIONES PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE FACTORES DE RIESGO EN LA POBLACIÓN ESCOLAR"

Proyecto de ley 7835/2023-CR

✓ Con Oficio N° 55-APPTOE-2024, de fecha 24 de mayo de 2024, el señor Freddy Luis Ascanoa Rojas, presidente de la Asociación de profesionales, promotores de tutoría y orientación, remite Informe de Opinión técnica N° 02-2024-APPTOE, respecto al referido proyecto de ley.

> *La Asociación de Profesionales Promotores de Tutoría y Orientación Educativa del Perú (APPTOE), emitió una* ***opinión técnica favorable*** *al Proyecto de Ley N.° 7835/2023-CR, que propone la designación de un promotor de tutoría y orientación educativa en cada institución educativa de educación básica regular y alternativa, en el marco del bienestar socioemocional. Esta iniciativa busca restablecer y fortalecer el enfoque preventivo en las escuelas peruanas, actualmente debilitado tras la desactivación de la Dirección de Tutoría y Orientación Educativa (DITOE) en el año 2015.*
>
> *En su análisis, APPTOE advierte que las normas técnicas vigentes sobre tutoría, como la RVM 212-2020-MINEDU, son inestables, desarticuladas y contradictorias, al depender de decisiones administrativas cambiantes. Asimismo, sostiene que estas normas no abordan integralmente los múltiples riesgos que enfrentan los estudiantes —como el trabajo infantil, la violencia familiar, la trata de personas, el embarazo adolescente o el consumo de sustancias— ni reconocen legalmente a los promotores de tutoría como actores claves en la prevención socioeducativa. La asociación enfatiza que los promotores tienen un rol pedagógico y formativo que no se superpone al de los psicólogos escolares, sino que lo complementa, actuando desde el aula y con herramientas educativas.*
>
> *Además, refuta las objeciones sobre el supuesto gasto que implicaría esta propuesta, señalando que su implementación puede*

ejecutarse con los recursos ya asignados al sector Educación, y que unifica estrategias actualmente dispersas, lo cual generaría incluso un ahorro para el Estado. También recuerda que el Tribunal Constitucional ha establecido que el Congreso no está impedido de legislar sobre propuestas que impliquen gasto, siempre que no se desconozca el principio de sostenibilidad fiscal.

La APPTOE concluye que el Proyecto de Ley N.° 7835/2023-CR ***es viable, necesario y urgente****, ya que permitiría fortalecer de manera efectiva la prevención en el sistema educativo nacional, institucionalizando el rol del promotor de tutoría con respaldo normativo. Por ello,* ***emite una opinión favorable*** *y recomienda su acumulación con otros proyectos a fines.*

✓ Con Oficio N° 022-2024- CRPLM, de fecha 24 de mayo de 2024, el Lic. Hannover Vela Vásquez, Decano del Colegio Regional de profesores de Lima Metropolitana, remite opinión sobre el proyecto de ley 5411/2022-CR, proyecto de ley 7461/2023-CR y proyecto de ley 7835/2023- CR.

El Colegio Regional de Profesores de Lima Metropolitana ***expresó su respaldo a los Proyectos de Ley N.° 7835/2023-CR, 7461/2023-CR y 5411/2022-CR****, al considerar que fortalecen el rol preventivo de la tutoría en las escuelas, abordan riesgos como el embarazo adolescente, el pandillaje y el consumo de drogas, y promueven el bienestar socioemocional. Destaca que estas propuestas corrigen vacíos normativos, amplían el registro de situaciones de riesgo y garantizan sostenibilidad institucional, por lo que recomienda su aprobación y otorgamiento de rango legal.*

Proyecto de ley 8423/2023-CR

✓ Con Oficio N.° 02399-2024-MINEDU/SG, de fecha 18 de octubre de 2024, la señora Gavilano Iglesias Doris, secretaria general del Ministerio de Educación, quien adjunta Informe N° 1356-2024-MINEDU/SG-OGAJ

DICTAMEN FAVORABLE RECAÍDO EN LOS PROYECTOS DE LEY 4291/2022-CR, 4711/2022-CR, 5411/2022-CR, 5501/2022-CR, 7461/2023-CR, 7835/2023-CR, 8423/2023-CR, 8886/2024-CR, 8897/2024-CR y 10904/2024-CR POR EL QUE, CON TEXTO SUSTITUTORIO, SE PROPONE LA "LEY QUE DESIGNA AL PROFESIONAL RESPONSABLE DE LA TUTORÍA, LA ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y EL BIENESTAR SOCIOEMOCIONAL DEL ESTUDIANTE EN LAS INSTITUCIONES Y PROGRAMAS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA, Y ESTABLECE DISPOSICIONES PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE FACTORES DE RIESGO EN LA POBLACIÓN ESCOLAR"

elaborado por la Oficina General de Asesoría Jurídica del Ministerio de Educación.

El Ministerio de Educación (MINEDU), emitió una ***opinión técnica desfavorable*** *respecto al Proyecto de Ley N.° 8423/2023-CR, el cual propone integrar a los docentes de tutoría y orientación socioemocional a la Carrera Pública Magisterial. Esta propuesta, que declara de interés nacional la designación progresiva de por lo menos un docente promotor en cada institución educativa pública, fue evaluada por diversas instancias técnicas del MINEDU, incluyendo la Dirección Técnico Normativa de Docentes (DITEN), la Unidad de Planificación y Presupuesto (UPP) y la Oficina General de Asesoría Jurídica (OGAJ).*

Desde el enfoque pedagógico, el informe sostiene que las funciones propuestas ya están contempladas en el marco normativo actual, dado que la tutoría y orientación educativa es considerada una labor inherente a todo docente de aula según el Reglamento de la Ley General de Educación y la Ley de Reforma Magisterial.

Además, se enfatiza que el actual currículo y normativa técnica ya exigen la realización de estas funciones como parte de la jornada laboral docente, por lo que crear una categoría diferenciada de "docente promotor" sería innecesario y redundante.

Desde la perspectiva presupuestal, la UPP advierte que el proyecto no cuenta con un marco financiero viable. No se identifican fuentes de financiamiento, ni se presenta un análisis costo-beneficio ni una estimación del número de plazas a crear. Por ello, la iniciativa contravendría el principio de equilibrio presupuestario establecido en el artículo 78 de la Constitución, así como en el Decreto Legislativo N.° 1440.

En efecto, el MINEDU concluye que el Proyecto de Ley 8423/2023-CR ***no resulta viable****, debido a que plantea una función ya regulada, no justifica técnica ni presupuestalmente su implementación, y presenta inconsistencias normativas. En consecuencia, recomienda comunicar esta opinión desfavorable a las comisiones correspondientes del Congreso de la República.*

Al respecto, sobre la posición del Ministerio de Educación (MINEDU) respecto al Proyecto de Ley 8423/2023-CR, al declararlo inviable por supuestamente duplicar funciones y carecer de financiamiento, la misma que es rechazada desde una perspectiva normativa, pedagógica y constitucional. Si bien se argumenta que la tutoría ya es una función inherente a los docentes dentro de la Carrera Pública Magisterial, esta afirmación **desconoce la realidad operativa del sistema educativo**, donde las labores de tutoría y orientación socioemocional son frecuentemente desatendidas, mal ejecutadas o asumidas como tareas secundarias ante la sobrecarga de los docentes de aula. La inclusión o diferenciación de actividades a cargo de un profesional especializado y exclusivo en esta función no representa una duplicidad, sino **una garantía de que se cumpla eficazmente un mandato curricular con enfoque preventivo y formativo**, algo que hoy no se logra con los recursos humanos existentes.

Asimismo, el argumento económico planteado por la Unidad de Planificación y Presupuesto del MINEDU —referido a la inexistencia de financiamiento— **no invalida la pertinencia de la propuesta legislativa**. La Constitución Política del Perú (artículo 79) impide que el Congreso genere gasto sin iniciativa del Ejecutivo, pero **no prohíbe la formulación de políticas públicas prioritarias**. De hecho, existen precedentes del Tribunal Constitucional que reconocen la posibilidad de legislar con incidencia presupuestaria cuando se trata de proteger derechos fundamentales, siempre que se contemple una implementación progresiva, como lo establece el mismo proyecto. Además, la propuesta permite su ejecución con el presupuesto ya asignado al MINEDU,

redistribuyendo funciones y priorizando la prevención, lo cual a mediano plazo generaría ahorro fiscal y reducción de problemas estructurales como el embarazo adolescente, el pandillaje o el abandono escolar.

Finalmente, **la crítica basada en la supuesta incoherencia normativa o técnica legislativa carece de peso sustantivo**, pues el proyecto busca precisamente llenar un vacío legal: hoy no existe una norma con rango de ley que reconozca formalmente el rol del profesional en tutoría preventiva, ni que asegure su presencia en todas las escuelas. La dispersión normativa actual, señalada incluso por especialistas del propio sector, justifica la necesidad de una norma integradora que dé coherencia y sostenibilidad institucional a esta función esencial.

En consecuencia, la postura del MINEDU prioriza una visión administrativa y presupuestal por encima de una mirada pedagógica y de derechos. Por el contrario, el Proyecto de Ley N.° 8423/2023-CR **responde a una necesidad real y urgente del sistema educativo**, y representa una oportunidad para fortalecer la escuela pública desde el enfoque preventivo, socioemocional e inclusivo que la realidad nacional demanda.

Proyecto de ley 8886/2024-CR

✓ Con Oficio N.° 0223-2025-MINEDU/SG, de fecha 24 de enero de 2025, la señora Gavilano Iglesias Doris, secretaria general del Ministerio de Educación, remite opinión solicitada, quien adjunta Informe N° 00126-2025-MINEDU/SG-OGAJ elaborado por la Oficina General de Asesoría Jurídica del Ministerio de Educación, en términos siguientes:

> *El Ministerio de Educación (MINEDU)* ***ha emitido una opinión desfavorable*** *respecto al Proyecto de Ley 8886/2024-CR, denominado "Ley que establece medidas para una educación sin violencia escolar". Esta posición se sustenta en el Informe N.°*

00126-2025-MINEDU/SG-OGAJ, que consolida los análisis técnicos y jurídicos de las direcciones especializadas del sector.

El MINEDU reconoce que el proyecto tiene como finalidad prevenir, identificar, sancionar y erradicar diversas formas de violencia escolar —incluyendo acoso, discriminación, hostigamiento e intimidación— tanto entre estudiantes como entre docentes y estudiantes. No obstante, señala que el texto propuesto distorsiona el objeto original de la Ley 29719, cuyo enfoque está limitado a la violencia entre pares, es decir, entre estudiantes.

Asimismo, el MINEDU objeta la propuesta de conferir al Consejo Educativo Institucional (CONEI) funciones sancionadoras, al considerar que dicha entidad tiene un rol exclusivamente participativo, de concertación y vigilancia ciudadana, sin competencia para imponer sanciones disciplinarias. Estas competencias, según el marco vigente, corresponden a otras instancias como el Comité de Gestión del Bienestar Escolar o las autoridades administrativas.

De igual forma, se rechaza la incorporación de disposiciones que imponen al Ministerio nuevas obligaciones (como garantizar la consejería psicológica obligatoria, emitir certificados de rehabilitación, o la expulsión de estudiantes agresores), pues estas ya están reguladas en los protocolos y normativas vigentes o exceden las competencias del sector educación, además de contradecir principios como el derecho a la educación, la permanencia escolar y el interés superior del niño.

Otro punto crítico señalado es la propuesta de modificar el artículo 52 de la Ley de Reforma Magisterial para ampliar las causales de inhabilitación docente. El MINEDU observa una incongruencia normativa entre este artículo y el resto del proyecto, y recuerda que

ya existen mecanismos legales (como la Ley N.° 32242) que regulan la destitución e inhabilitación de personal docente por faltas graves.

El Ministerio de Educación concluye que el Proyecto de Ley N.° 8886/2024-CR no resulta viable en su redacción actual, debido a que desnaturaliza el objeto de la Ley N.° 29719 al extender su alcance más allá de la violencia entre estudiantes, asigna funciones sancionadoras al Consejo Educativo Institucional (CONEI) sin sustento legal, e introduce medidas que contravienen principios constitucionales como el derecho a la educación, la permanencia escolar y el interés superior del niño. Asimismo, el proyecto plantea disposiciones que ya se encuentran reguladas en el marco normativo vigente o exceden las competencias del sector educación.

Al respecto, frente a la posición del Ministerio de Educación, que declara inviable el Proyecto de Ley 8886/2024-CR, resulta cuestionable, ya que desconoce la realidad urgente que enfrentan miles de estudiantes víctimas de violencia escolar en múltiples formas, incluidas aquellas ejercidas por adultos dentro del entorno educativo. **La ampliación del enfoque normativo no desnaturaliza la ley, sino que responde a un mandato constitucional de proteger integralmente a la niñez y adolescencia, conforme al principio del interés superior del niño**. Finalmente, lejos de contradecir derechos fundamentales, las medidas propuestas buscan equilibrar la protección de las víctimas con acciones restaurativas y preventivas, enmarcadas en estándares internacionales que exigen una respuesta estatal efectiva frente a la violencia en el sistema educativo.

✓ Con Oficio N.° D 00228-2025-MIMP, de fecha 04 de febrero de 2025, el señor James Raphael Morales Campos, Secretario General del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, remite opinión solicitada, Informe N° D000056-2025-MIMP-OGAJ, elaborado por la Oficina General de Asesoría Jurídica y el Informe N° D000005-2025-MIMP-DVMPV-FLAM, elaborado por el Despacho Viceministerial de Poblaciones Vulnerables,

DICTAMEN FAVORABLE RECAÍDO EN LOS PROYECTOS DE LEY 4291/2022-CR, 4711/2022-CR, 5411/2022-CR, 5501/2022-CR, 7461/2023-CR, 7835/2023-CR, 8423/2023-CR, 8886/2024-CR, 8897/2024-CR y 10904/2024-CR POR EL QUE, CON TEXTO SUSTITUTORIO, SE PROPONE LA "LEY QUE DESIGNA AL PROFESIONAL RESPONSABLE DE LA TUTORÍA, LA ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y EL BIENESTAR SOCIOEMOCIONAL DEL ESTUDIANTE EN LAS INSTITUCIONES Y PROGRAMAS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA, Y ESTABLECE DISPOSICIONES PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE FACTORES DE RIESGO EN LA POBLACIÓN ESCOLAR"

para conocimiento y fines pertinentes, en términos siguientes:

> *El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) emitió opinión favorable con observaciones respecto al Proyecto de Ley N.° 8886/2024-CR, que propone establecer medidas para una educación sin violencia escolar mediante la modificación de los artículos 1, 4, 5, 6, 8 y 11 de la Ley N.° 29719 y el artículo 52 de la Ley N.° 29944 (Ley de Reforma Magisterial).*
>
> *El análisis técnico reconoce que el proyecto se encuentra alineado con los principios rectores de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, promoviendo la erradicación de toda forma de violencia, acoso y hostigamiento dentro del entorno escolar. El MIMP valora positivamente el fortalecimiento de los mecanismos de prevención, identificación y sanción de la violencia escolar, así como el establecimiento de nuevas obligaciones para docentes, padres de familia y el Ministerio de Educación.*
>
> *Sin embargo, el MIMP advierte que algunas disposiciones del proyecto requieren mayor desarrollo técnico y garantías procedimentales, particularmente aquellas que permiten la suspensión y expulsión de estudiantes que acumulen tres o más registros por actos de violencia. Estas medidas, si bien buscan proteger a las víctimas, podrían afectar el principio del interés superior del niño y el derecho a la educación del agresor, que también es menor de edad y requiere atención especializada.*
>
> *Asimismo, se recomienda que el Ministerio de Educación emita opinión respecto a la implementación de sanciones disciplinarias, el uso de la plataforma SISEVE y la obligación de los docentes de informar sobre objetos peligrosos, así como que se evalúe la coherencia del título de la norma con el contenido propuesto.*

En efecto, el MIMP concluye que el Proyecto de Ley 8886/2024-CR es

favorable con observaciones, valorando su enfoque preventivo y su intención de proteger a la comunidad escolar frente a la violencia, pero recomendando al legislador que revise y adecúe los aspectos señalados para garantizar un tratamiento integral, equilibrado y respetuoso de los derechos fundamentales de todos los actores involucrados

Proyecto de ley 8897/2024-CR

✓ Con Oficio N° 70-APPTOE-2024, de fecha 16 de setiembre de 2024, el señor Freddy Luis Ascanoa Rojas, presidente de la Asociación de profesionales, promotores de tutoría y orientación, remite Informe de Opinión técnica N° 03-2024-APPTOE, respecto al referido proyecto de ley.

> *La Asociación de Profesionales Promotores de Tutoría y Orientación Educativa del Perú (APPTOE) emitió* ***opinión favorable al Proyecto de Ley 8897/2024-CR****, que propone incorporar un promotor de tutoría en cada institución educativa pública y establecer tolerancia cero ante actos de violencia escolar. La APPTOE destaca que esta figura cumple funciones pedagógicas y preventivas distintas a las del psicólogo escolar, y que su incorporación con rango de ley permitirá unificar normas dispersas, fortalecer la prevención y mejorar el bienestar socioemocional de los estudiantes.* ***Concluye que la propuesta es necesaria, viable y recomienda su aprobación y acumulación con proyectos afines.***

✓ Con Oficio N° 005-2025-SUNEDU-DS, de fecha 7 de enero de 2025, el señor Manuel Enemecio Castillo Venegas, superintendente de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, Informe N° 00010-2025-SUNEDU-SG-OAJ, elaborado por la Oficina de Asesoría Jurídica, mediante el cual se da respuesta al requerimiento.

> *La SUNEDU, mediante informe jurídico, concluye que no tiene competencia para pronunciarse sobre el Proyecto de Ley N.°*

8897/2024-CR, al estar referido a la educación básica y no al ámbito universitario, que es el que regula conforme a la Ley N.° 30220. Por ello, recomienda que la evaluación técnica sea asumida por el Ministerio de Educación, como entidad competente en la materia.

✓ Con Oficio N° D 0085-2025-MIMP-SG, de fecha 16 de enero de 2025, James Raphael Morales Campos, secretario general del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, se adjunta informe técnico N° D000001-2025-MIMP-DPVLV-DEHM, elaborado por la Dirección de Políticas para una Vida Libre de Violencia, respecto al proyecto de ley 8897/2024-CR.

> ***El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos concluye que no tiene competencia para emitir opinión sobre el Proyecto de Ley 8897/2024-CR,*** *al tratarse de una materia vinculada exclusivamente al ámbito educativo, específicamente a la educación básica, cuya regulación corresponde al Ministerio de Educación. Por ello, recomienda que sea dicha entidad la que evalúe la viabilidad de la propuesta.*

✓ Con Oficio N° 390-2025-JUS/SG, de fecha 28 de enero de 2025, George G. Otsu Sánchez, secretario general del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, adjunta informe legal N° 775-2024-JUS/DGDNCR elaborado por la Dirección General de Desarrollo Normativo y Calidad Regulatoria del Viceministerio de Justicia, en términos siguientes:

> *El* ***Ministerio de Justicia y Derechos Humanos concluye que no es competente para emitir opinión sobre el Proyecto de Ley N.° 8897/2024-CR****, al tratarse de una materia vinculada a la educación básica, que corresponde exclusivamente al ámbito del Ministerio de Educación. Por ello, recomienda que la evaluación de la propuesta sea realizada por dicha entidad competente.*

DICTAMEN FAVORABLE RECAÍDO EN LOS PROYECTOS DE LEY 4291/2022-CR, 4711/2022-CR, 5411/2022-CR, 5501/2022-CR, 7461/2023-CR, 7835/2023-CR, 8423/2023-CR, 8886/2024-CR, 8897/2024-CR y 10904/2024-CR POR EL QUE, CON TEXTO SUSTITUTORIO, SE PROPONE LA "LEY QUE DESIGNA AL PROFESIONAL RESPONSABLE DE LA TUTORÍA, LA ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y EL BIENESTAR SOCIOEMOCIONAL DEL ESTUDIANTE EN LAS INSTITUCIONES Y PROGRAMAS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA, Y ESTABLECE DISPOSICIONES PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE FACTORES DE RIESGO EN LA POBLACIÓN ESCOLAR"

✓ Con Oficio N° 011-2025-CRPLM, de fecha 8 de abril de 2025, el Lic. Hannover Vela Vásquez, Decano del Colegio Regional de profesores de Lima Metropolitana, remite opinión sobre el proyecto de ley 8897/2024-CR, en términos siguientes:

> *El Colegio Regional de Profesores de Lima Metropolitana (CRPLM), mediante el Oficio N.° 011-2025-CRPLM, emitió una* ***opinión institucional favorable*** *al Proyecto de Ley 8897/2024-CR, el cual propone incorporar un promotor de tutoría y orientación educativa en cada institución educativa pública y establecer tolerancia cero frente a cualquier acto de violencia escolar. El CRPLM valora que esta iniciativa fortalece el enfoque preventivo y socioemocional en el sistema educativo, dotando de rango legal a funciones esenciales para la convivencia escolar y el desarrollo integral del estudiante.*
>
> *En su análisis, el CRPLM respalda la designación progresiva de promotores de tutoría con perfil pedagógico y el registro obligatorio de incidencias de violencia, consumo de drogas o actos de agresión, señalando que actualmente el MINEDU no cuenta con estadísticas confiables ni protocolos eficaces ante estas situaciones. Asimismo, apoya la medida de trasladar a estudiantes infractores persistentes a la Educación Básica Alternativa y, de ser necesario, a la modalidad virtual, destacando la necesidad de garantizar entornos seguros para todos los miembros de la comunidad educativa. También saluda que el acceso al cargo se realice por concurso público sin entrevista personal, lo que evita riesgos de manipulación.*
>
> ***El CRPLM concluye que el Proyecto de Ley 8897/2024-CR es pertinente, necesario y oportuno para fortalecer la tutoría,*** *mejorar la convivencia escolar y prevenir la violencia desde un enfoque pedagógico. Por ello, otorga una* ***opinión favorable*** *al proyecto y sugiere incorporar una disposición transitoria que modifique el artículo 76 de la Ley N.° 29944 para incluir a los*

promotores de tutoría en la carrera pública magisterial, así como restituir la Dirección Nacional de Tutoría (DITOE) en el Ministerio de Educación.

5.4. ANÁLISIS DEL IMPACTO DE LA NORMA PROPUESTA EN LA LEGISLACIÓN VIGENTE

En relación con el análisis del impacto del texto sustitutorio en la legislación vigente, se advierte que su aprobación representa una **mejora sustancial del marco normativo actual**. Esta iniciativa no configura un régimen jurídico independiente ni paralelo, sino que **fortalece, desarrolla y otorga de eficacia operativa** a principios y derechos ya consagrados en el ordenamiento jurídico nacional, así como en los tratados internacionales ratificados por el Estado peruano. A su vez, la propuesta legislativa encuentra sólido respaldo en la **jurisprudencia consolidada del Tribunal Constitucional del Perú**, que reconoce la facultad del Congreso para legislar en materias de alto interés público y social, especialmente cuando están orientadas a la protección de derechos fundamentales.

Desde una perspectiva constitucional, la norma se sustenta en el artículo 1 de la Constitución Política del Perú, que consagra la dignidad humana como fin supremo de la sociedad y del Estado. Se articula, además, con el artículo 13, que establece como finalidad de la educación el desarrollo integral de la persona, y con el artículo 14, que dispone que la educación física y el deporte —así como el bienestar socioemocional— forman parte esencial del proceso educativo. En complemento, el artículo IX del Título Preliminar del Código de los Niños y Adolescentes establece el principio del interés superior del niño como criterio rector de todas las decisiones y políticas públicas relacionadas con la infancia y la adolescencia.

En el plano legislativo, esta ley fortalece y complementa varias normas clave. La **Ley General de Educación (Ley 28044)**, en sus artículos 7, 18, 35 y 36, reconoce el derecho del estudiante a una formación integral en entornos seguros y plantea la necesidad de desarrollar acciones tutoriales

a cargo de profesionales especializados. No obstante, hasta ahora no existe una norma con rango legal que garantice de manera obligatoria la presencia de dichos profesionales. La ley propuesta cubre ese vacío y asegura la continuidad institucional de esta función. De igual forma, la **Ley 29719**, que promueve la convivencia sin violencia en las instituciones educativas, se ve fortalecida con esta ley, ya que incorpora personal capacitado para implementar sus mandatos de prevención, identificación y atención del acoso escolar.

Asimismo, la propuesta contribuye a la aplicación efectiva de la **Ley 30364**, que promueve la erradicación de la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Esta norma dispone que los espacios educativos deben ser parte de la estrategia de prevención, por lo que contar con profesionales orientadores y con enfoque socioemocional permite abordar esta dimensión desde el aula. De igual forma, el **Código de los Niños y Adolescentes (D.S. N.° 003-2020-MIMP)** exige al Estado garantizar entornos protectores, seguros y emocionalmente estables para niñas, niños y adolescentes, lo cual se materializa mediante la designación progresiva de promotores de tutoría y bienestar.

Asimismo, el Tribunal Constitucional del Perú ha desarrollado una sólida línea jurisprudencial en torno al derecho a la educación, destacando su contenido y exigibilidad en diversos planos. El TC, considera que la educación es un derecho fundamental y, al mismo tiempo, un servicio público esencial para el desarrollo humano y social. Así lo establece en los fundamentos 4 y 6 del Exp. N.° 00538-2019-PA/TC, **donde precisa que este derecho permite el ejercicio pleno de otros derechos fundamentales y fortalece la autonomía individual**, en línea con lo señalado en el Exp. N.° 00091-2005-PA/TC. Asimismo, en los fundamentos 8 al 12 y 17 de la misma sentencia, el Tribunal reconoce que el principio del interés superior del niño, niña y adolescente debe regir toda decisión que les afecte, incluso en situaciones de incumplimiento contractual por parte de los padres, otorgándole jerarquía constitucional

conforme al artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño y al artículo IX del Código de los Niños y Adolescentes.

De otro lado, en las STC Exp. N.° 00005-1997-PA/TC y Exp. N.° 01975-2018-PA/TC, **se establece que la permanencia del estudiante en el sistema educativo debe estar acompañada del respeto a su dignidad, asegurando un entorno libre de maltrato físico o psicológico**.

> *7. La niñez constituye un grupo de interés y de protección especial y prioritario del Estado. En efecto, el artículo 4 de la Constitución así lo ha considerado al establecer que "la comunidad y el Estado deben proteger especialmente al niño y al adolescente".*
>
> *8. Esto presupone colocar a los niños en un lugar de singular relevancia en el diseño e implementación de las políticas públicas, dada su particular vulnerabilidad al ser sujetos que empiezan la vida y que se encuentran en situación de indefensión. Por ello, requieren especial atención por parte de la familia, la sociedad y el Estado, a fin de que puedan alcanzar el pleno desarrollo de su personalidad. (Expediente 01975-2018-PA/TC.)*

A nivel internacional, la **Convención sobre los Derechos del Niño** establece, en sus artículos 19, 28 y 29, la obligación de los Estados de garantizar una educación segura, libre de violencia y orientada al desarrollo pleno del potencial humano. En la misma línea, la **Observación General N.° 13 del Comité de los Derechos del Niño (2011)** exhorta a los Estados parte a implementar políticas educativas sostenidas de prevención de la violencia escolar, articuladas con servicios especializados y apoyadas por recursos humanos capacitados.

En consecuencia, la norma propuesta con texto sustitutorio mejora el sistema legal vigente, al articular de forma coherente y efectiva los mandatos constitucionales, legales y convencionales. Establece mecanismos concretos para garantizar el bienestar emocional de los

estudiantes, contribuye a fortalecer la convivencia escolar, y responde al deber del Estado de proteger a la niñez y adolescencia en el espacio educativo. Su aprobación no solo es jurídicamente viable y constitucionalmente legítima, sino también socialmente necesaria e impostergable.

5.5. ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO

Con la aprobación del texto sustitutorio, debe entenderse que representa una inversión estratégica con una alta rentabilidad social frente a los desafíos que enfrenta actualmente el sistema educativo peruano. Asimismo, a pesar de que, de manera previsible la implementación de las disposiciones que contengan la presente propuesta, implique costos administrativos y operativos, estos resultan progresivos, planificables y ejecutables con cargo al presupuesto del Ministerio de Educación y las unidades descentralizadas, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

Sin perjuicio de ello, se precisa que, el Tribunal Constitucional ha establecido que ***una iniciativa legislativa no vulnera lo dispuesto en el artículo 79 de la Constitución Política, en cuanto no genere un gasto púbico inmediatamente aplicable a la Ley de Presupuesto Anual vigente.*** Es decir, que tal prohibición "*no impide que una iniciativa legislativa presentada por los congresistas pueda constituir una fuente jurídica, para que, posteriormente, y en el ámbito de las atribuciones del Poder Ejecutivo, este determine o considere la inclusión de las partidas necesarias en la Ley del Presupuesto anual para atender los gastos que eventualmente requiera su materialización (Sentencia 0018-2021-PI/TC, fundamento 179)*"

De otro lado, la norma requerirá de la creación progresiva de plazas para profesionales especializados en tutoría y bienestar socioemocional en la medida de su avance en su implementación; sin embargo, inicialmente se dispone sobre la base de presupuestos asignados en el área de tutoría que

se desarrolla en las instituciones educativas, exigiendo de ese modo, al sector competente, efectuar las modificaciones presupuestarias correspondientes, para distribuir adecuadamente los recursos asignados. Estos costos iniciales deducidos de modificaciones presupuestales se justifican ampliamente ante los beneficios directos que ofrece: **la atención oportuna de estudiantes en situación de riesgo, la mejora del clima escolar, la disminución de la carga emocional y pedagógica de los docentes, y la implementación efectiva de acciones de prevención y orientación desde las aulas.**

Además, la propuesta legislativa, contribuye a la reducción sostenida de la violencia escolar, el embarazo adolescente, el consumo de sustancias psicoactivas, el abandono escolar y el deterioro de la salud mental estudiantil. Todos estos factores, si no son abordados oportunamente, generan a futuro elevados costos en salud pública, justicia penal y programas sociales, afectando el desarrollo humano y económico del país.

La propuesta también fortalece la corresponsabilidad intersectorial, permitiendo articular a la escuela con los sectores de salud, protección social y justicia, mediante protocolos de derivación que son facilitados por el profesional de tutoría. Con ello, se asegura una respuesta oportuna y articulada frente a problemáticas complejas que trascienden lo estrictamente pedagógico.

Por tanto, el análisis costo-beneficio de esta propuesta legislativa es ampliamente favorable. No solo garantiza la sostenibilidad técnica y presupuestal de una política pública clave, sino que promueve condiciones reales para garantizar el derecho a una educación integral, inclusiva y emocionalmente segura. En un contexto donde el 97% de las instituciones educativas no cuenta con psicólogos escolares y donde los niveles de violencia, depresión y deserción siguen en aumento, esta norma se convierte en una herramienta necesaria, viable y urgente para transformar

la realidad educativa del país desde una perspectiva preventiva y humanizadora.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 75 del Reglamento del Congreso de la República, en el presente dictamen se realiza análisis de los efectos cualitativos sobre las personas o los grupos de personas en las que impactará la norma propuesta, es decir, los involucrados. Además, la iniciativa legislativa no vulnera lo dispuesto en el artículo 79 de la Constitución Política del Perú.

Efectos cualitativos de los involucrados de aprobarse la iniciativa legislativa

Involucrados	Efectos directos	Efectos indirectos
Docentes tutores	Designación progresiva de profesionales especializados en tutoría y bienestar socioemocional	Ahorro en costos futuros en salud, seguridad y justicia por prevención temprana
Estudiantes	Atención oportuna a estudiantes en situación de riesgo (violencia, depresión, embarazo adolescente)	Disminución de la violencia escolar y el bullying a mediano plazo Reducción de indicadores de deserción escolar y embarazos adolescentes
Docentes	Reducción de la carga tutorial y emocional del docente de aula	Mejora del clima institucional y del rendimiento académico
Institución educativa	Implementación de protocolos institucionales para prevención y derivación intersectorial	Escuelas saludables

DICTAMEN FAVORABLE RECAÍDO EN LOS PROYECTOS DE LEY 4291/2022-CR, 4711/2022-CR, 5411/2022-CR, 5501/2022-CR, 7461/2023-CR, 7835/2023-CR, 8423/2023-CR, 8886/2024-CR, 8897/2024-CR y 10904/2024-CR POR EL QUE, CON TEXTO SUSTITUTORIO, SE PROPONE LA "LEY QUE DESIGNA AL PROFESIONAL RESPONSABLE DE LA TUTORÍA, LA ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y EL BIENESTAR SOCIOEMOCIONAL DEL ESTUDIANTE EN LAS INSTITUCIONES Y PROGRAMAS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA, Y ESTABLECE DISPOSICIONES PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE FACTORES DE RIESGO EN LA POBLACIÓN ESCOLAR"

V. CONCLUSIÓN

Por lo expuesto, la Comisión de Educación, Juventud y Deporte, de conformidad con el literal b) del artículo 70 del Reglamento del Congreso de la República, recomienda la **APROBACIÓN** del dictamen recaído en los proyectos de ley **4291/2022-CR, 4711/2022-CR, 5411/2022-CR, 5501/2022-CR, 7461/2023-CR, 7835/2023-CR, 8423/2023-CR, 8886/2024-CR, 8897/2024-CR y 10904/2024-CR**, con el siguiente texto sustitutorio:

TEXTO SUSTITUTORIO

LEY QUE DESIGNA AL PROFESIONAL RESPONSABLE DE LA TUTORÍA, LA ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y EL BIENESTAR SOCIOEMOCIONAL DEL ESTUDIANTE EN LAS INSTITUCIONES Y PROGRAMAS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA, Y ESTABLECE DISPOSICIONES PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE FACTORES DE RIESGO EN LA POBLACIÓN ESCOLAR

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Objeto de la Ley

La presente ley tiene por objeto disponer la designación del profesional responsable de la tutoría, la orientación educativa y el bienestar socioemocional de los estudiantes en las instituciones y programas educativos públicos de la Educación Básica, así como establecer disposiciones destinadas a la prevención y atención de factores de riesgo que afecten a la población escolar.

Artículo 2. Alcances de la Ley

Están comprendidas en la presente ley las instituciones educativas públicas de las siguientes modalidades:

a) Educación Básica Regular (EBR)
b) Educación Básica Especial (EBE)
c) Educación Básica Alternativa (EBA)

CAPÍTULO II

PROMOTOR DE LA TUTORÍA, LA ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y EL BIENESTAR SOCIOEMOCIONAL

Artículo 3. Acciones de prevención desarrolladas por el promotor de la tutoría, la orientación educativa y el bienestar socioemocional

3.1. El promotor de la tutoría, la orientación educativa y el bienestar socioemocional asesora y acompaña al Comité referido en el artículo 4, asimismo, capacita, asesora, acompaña y monitorea permanente a los tutores de aula de la institución educativa para que desarrollen intervenciones pedagógicas y educativas de carácter preventivo, dirigidas a la identificación y atención oportuna de factores de riesgo que afectan a la población escolar. Dichos factores comprenden, entre otros, la violencia escolar, el acoso entre estudiantes (bullying), la deserción escolar, el embarazo adolescente, el consumo de sustancias psicoactivas, la delincuencia juvenil, violencia sexual, discriminación, trabajo infantil, trata de menores y los trastornos emocionales como la depresión infantil.

3.2. Asimismo, el promotor de la tutoría, la orientación educativa y el bienestar socioemocional promueve el fortalecimiento de la orientación vocacional, la consolidación de entornos familiares saludables y el desarrollo de habilidades socioemocionales.

3.3. La intervención del promotor de la tutoría, la orientación educativa y el bienestar socioemocional contribuye a la formación integral de los estudiantes como ciudadanos comprometidos con una cultura de paz, el bienestar emocional y la responsabilidad social, en articulación con las entidades del Estado, en el marco de sus competencias y funciones.

Artículo 4. Comité de la tutoría, la orientación educativa y el bienestar socioemocional

Cada institución educativa de Educación Básica cuenta con un Comité de la tutoría, la orientación educativa y el bienestar socioemocional.

Artículo 5. Selección del promotor de la tutoría, la orientación educativa y el bienestar socioemocional

5.1. Para acceder al cargo de promotor de la tutoría, la orientación educativa y el bienestar socioemocional en las instituciones y programas educativos públicos de la Educación Básica, el postulante debe cumplir con los siguientes requisitos:

a) Contar con título profesional de licenciado en Educación o título pedagógico debidamente registrado ante la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU).
b) Presentar un examen de estado mental emitido por un establecimiento de salud público o privado autorizado. La presentación de un informe adulterado constituye delito y genera responsabilidad penal conforme a la normativa vigente.

5.2. El ingreso al cargo se realiza mediante concurso público de méritos. La jornada laboral es de treinta horas pedagógicas semanales.

Artículo 6. Financiamiento

La implementación de lo dispuesto en la presente ley se financia con cargo al presupuesto institucional del Ministerio de Educación y de los gobiernos regionales, sin demandar recursos adicionales al tesoro público. Para tal efecto, se autoriza a las entidades mencionadas a realizar las modificaciones presupuestarias que resulten necesarias para cumplir con lo dispuesto en la presente ley, conforme a la normativa vigente sobre la materia.

CAPÍTULO III
ACCIONES FRENTE A LOS ACTOS DE VIOLENCIA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS

Artículo 7. Libro de Registro de Incidencias

7.1. Cada institución educativa de la Educación Básica cuenta con un Libro de Registro de Incidencias, bajo responsabilidad del director, en el cual se consignan de manera obligatoria y detallada todos los actos de violencia en los que estén involucrados estudiantes, así como los casos relacionados con la comercialización o consumo de sustancias psicoactivas.

7.2. El registro contiene una descripción precisa de los hechos ocurridos, el procedimiento seguido en cada caso, los resultados de la investigación correspondiente y las medidas adoptadas, cuando corresponda, garantizando en todo momento el respeto del debido procedimiento, la confidencialidad de la información y el principio del interés superior del estudiante.

7.3. Los padres de familia de los estudiantes involucrados son informados sobre lo consignado en el Libro de Registro de Incidencias, bajo las reservas de confidencialidad, el debido procedimiento y el principio del interés superior del estudiante.

Artículo 8. Traslado de estudiante infractor reincidente

8.1. El estudiante que incurra en actos de violencia física o psicológica contra otro estudiante, personal directivo, docente, auxiliar o personal de servicio, y dichos actos hayan sido registrados en más de tres oportunidades en el Libro de Registro de Incidencias, es sujeto a una medida de traslado a otra modalidad del sistema de la Educación Básica, conforme a los principios de progresividad, atención al riesgo y garantía del derecho a la educación.

8.2. El traslado se ejecuta de manera gradual, aplicando el siguiente criterio:

a) El estudiante matriculado en la modalidad de Educación Básica Regular (EBR), en el nivel de Educación Secundaria, es derivado a la modalidad de Educación Básica Alternativa (EBA).

b) Si persiste en la comisión de actos de violencia mientras cursa estudios en la EBA, es inhabilitado para continuar su formación en modalidades presenciales de la educación pública, debiendo culminar su trayectoria educativa únicamente en la modalidad virtual habilitada por el Ministerio de Educación, garantizándose el acceso, acompañamiento y permanencia en el sistema educativo.

8.3. En los casos de violencia sexual, extorsión u otros delitos graves, mientras dure el proceso de investigación correspondiente, el estudiante será separado de manera inmediata de la modalidad presencial y continuará su formación en la modalidad virtual, a fin de garantizar su permanencia en el sistema educativo. Asimismo, se implementará un plan de intervención pedagógica y psicosocial individualizado con la finalidad de prevenir la desvinculación escolar, con la participación de un equipo multidisciplinario y bajo monitoreo permanente a cargo de la unidad de gestión educativa local (UGEL). De ser necesario, el estudiante será derivado a centros especializados, en coordinación con las entidades competentes del Estado, respetando su situación personal y en

observancia de los principios del debido procedimiento, la rehabilitación y la reintegración social. Adicionalmente, constituye responsabilidad funcional comunicar al representante del Ministerio Público sobre los hechos que motivaron la adopción de dicha medida, en un plazo máximo de veinticuatro horas contadas a partir de su ocurrencia.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

PRIMERA. Reglamentación

El Poder Ejecutivo, en coordinación con el Ministerio de Educación, reglamenta la presente ley en el plazo máximo de sesenta días calendario contados a partir de su entrada en vigor.

SEGUNDA. Declaratoria del Día Nacional de la Concientización contra el Bullying o Acoso Escolar

Se declara Día Nacional de la Concientización contra el Bullying o Acoso Escolar el 2 de mayo de cada año, con el objetivo de promover la reflexión, sensibilización y toma de conciencia sobre las consecuencias del acoso escolar, en sus manifestaciones presenciales y digitales, que afectan a niños y adolescentes en todo el territorio nacional.

En el marco de sus competencias, autonomía institucional y disponibilidad presupuestal, las entidades públicas impulsan acciones educativas, preventivas y de sensibilización, tales como charlas, conversatorios, seminarios, campañas informativas, actividades escolares y comunitarias, entre otras, orientadas a prevenir, atender y erradicar esta forma de violencia que vulnera el bienestar, la dignidad y el desarrollo integral de la población escolar.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS MODIFICATORIAS

PRIMERA. Modificación del artículo 76 de la Ley 29944, Ley de Reforma Magisterial

Se modifica el segundo párrafo del artículo 76 de la Ley 29944, Ley de Reforma Magisterial, en los siguientes términos:

"Artículo 76. Contratación

[...]

Excepcionalmente pueden ejercer la docencia bajo la modalidad de contrato, en el nivel secundario de educación básica regular y educación técnica productiva, profesionales de otras disciplinas y personas con experiencia práctica reconocida en áreas afines a su especialidad u oficio. **Asimismo, pueden ser contratados para ocupar el cargo de promotor de la tutoría, la orientación educativa y el bienestar socioemocional los profesionales que cuenten con título profesional de licenciado en Educación o título pedagógico debidamente registrado ante la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) o ante la instancia que haga sus veces. El acceso a dicho cargo se realiza mediante concurso público de méritos, considerando de manera no excluyente los criterios de formación profesional docente, experiencia laboral y méritos debidamente acreditados.**

[...]

SEGUNDA. Modificación de los artículos 5 y 11 de la Ley 29719, Ley que promueve la convivencia sin violencia en las instituciones educativas

Se modifica el numeral 1 y se incorpora el numeral 6 en el artículo 5, y se incorpora un segundo párrafo en el artículo 11 de la Ley 29719, Ley que promueve la convivencia sin violencia en las instituciones educativas, en los siguientes términos:

"Artículo 5. Obligaciones del Ministerio de Educación

El Ministerio de Educación tiene las siguientes obligaciones:

1. Elaborar un **Protocolo de atención, claro y preciso, orientado** a diagnosticar, prevenir, evitar, sancionar y erradicar la violencia, el hostigamiento y la intimidación entre alumnos, de modo que sea entendida por todos los miembros de la institución educativa, **con énfasis en la atención a la violencia digital manifestada en el ciberbullying, grooming o ciberacoso**.

[...]

6. Formular, mediante la Dirección General de Calidad de la Gestión Escolar, el diseño e implementación del Programa Nacional de Prevención y Concientización del Ciberbullying o Ciberacoso contra Niños y Adolescentes, en coordinación con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, entidades competentes y sociedad civil representada.

DICTAMEN FAVORABLE RECAÍDO EN LOS PROYECTOS DE LEY 4291/2022-CR, 4711/2022-CR, 5411/2022-CR, 5501/2022-CR, 7461/2023-CR, 7835/2023-CR, 8423/2023-CR, 8886/2024-CR, 8897/2024-CR y 10904/2024-CR POR EL QUE, CON TEXTO SUSTITUTORIO, SE PROPONE LA "LEY QUE DESIGNA AL PROFESIONAL RESPONSABLE DE LA TUTORÍA, LA ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y EL BIENESTAR SOCIOEMOCIONAL DEL ESTUDIANTE EN LAS INSTITUCIONES Y PROGRAMAS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA, Y ESTABLECE DISPOSICIONES PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE FACTORES DE RIESGO EN LA POBLACIÓN ESCOLAR"

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: HERRERA MEDINA Noelia Rossvith FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 09/06/2025 16:55:16-0500

Artículo 11. Libro de Registro de Incidencias

[...]

En los casos de violencia sexual, extorsión u otros delitos graves, mientras dure el proceso de investigación correspondiente, el estudiante será separado de manera inmediata de la modalidad presencial y continuará su formación en la modalidad virtual, a fin de garantizar su permanencia en el sistema educativo. Asimismo, se implementará un plan de intervención pedagógica y psicosocial individualizado con la finalidad de prevenir la desvinculación escolar, con la participación de un equipo multidisciplinario y bajo monitoreo permanente a cargo de la unidad de gestión educativa local (UGEL). De ser necesario, el estudiante será derivado a centros especializados, en coordinación con las entidades competentes del Estado, respetando su situación personal y en observancia de los principios del debido procedimiento, la rehabilitación y la reintegración social. Adicionalmente, constituye responsabilidad funcional comunicar al representante del Ministerio Público sobre los hechos que motivaron la adopción de dicha medida, en un plazo máximo de veinticuatro horas contadas a partir de su ocurrencia.

Dese cuenta.
Sala de Comisiones.
Lima, 20 de mayo de 2025.

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: ECHEVERRIA RODRIGUEZ Hamlet FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 04/06/2025 11:57:12-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: MARTICORENA MENDOZA Jorge Alfonso FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 03/06/2025 17:06:34-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: MONTALVO CUBAS Segundo Toribio FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 30/05/2025 19:16:39-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: PAREDES GONZALES Alex Antonio FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 24/06/2025 09:33:28-0500

SEGUNDO TORIBIO MONTALVO CUBAS
Presidente
Comisión de Educación, Juventud y Deporte

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: CRUZ MAMANI Flavio FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 02/06/2025 18:47:03-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: PARIONA SINCHE Alfredo FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 02/06/2025 19:58:53-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: VASQUEZ VELA Lucinda FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 02/06/2025 18:15:00-0500

DICTAMEN FAVORABLE RECAÍDO EN LOS PROYECTOS DE LEY 4291/2022-CR, 4711/2022-CR, 5411/2022-CR, 5501/2022-CR, 7461/2023-CR, 7835/2023-CR, 8423/2023-CR, 8886/2024-CR, 8897/2024-CR y 10904/2024-CR POR EL QUE, CON TEXTO SUSTITUTORIO, SE PROPONE LA "LEY QUE DESIGNA AL PROFESIONAL RESPONSABLE DE LA TUTORÍA, LA ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y EL BIENESTAR SOCIOEMOCIONAL DEL ESTUDIANTE EN LAS INSTITUCIONES Y PROGRAMAS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA, Y ESTABLECE DISPOSICIONES PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE FACTORES DE RIESGO EN LA POBLACIÓN ESCOLAR"

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: ZEBALLOS MADARIAGA Carlos Javier FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 03/06/2025 12:08:59-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: QUIROZ BARBOZA Segundo Teodomiro FAU 20161749126 soft
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 03/06/2025 11:03:57-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: RIVAS CHACARA Janet Milagros FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 03/06/2025 13:51:57-0500

CONGRESO REPÚBLICA
Firmado digitalmente por: QUISPE MAMANI Wilson Rusbel FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 03/06/2025 14:45:40-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: TELLO MONTES Nivardo Edgar FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 03/06/2025 18:03:42-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: ALVA ROJAS Carlos Enrique FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 04/06/2025 12:33:47-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: MEDINA HERMOSILLA Elizabeth Sara FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 05/06/2025 11:08:00-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: PAZO NUNURA Jose Bernardo FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 04/06/2025 12:18:44-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: TORRES SALINAS Rosio FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 04/06/2025 16:37:07-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: MEDINA MINAYA Esdras Ricardo FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 25/06/2025 15:56:53-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: MORI CELIS Juan Carlos FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 02/06/2025 17:47:31-0500

DICTAMEN FAVORABLE RECAÍDO EN LOS PROYECTOS DE LEY 4291/2022-CR, 4711/2022-CR, 5411/2022-CR, 5501/2022-CR, 7461/2023-CR, 7835/2023-CR, 8423/2023-CR, 8886/2024-CR, 8897/2024-CR y 10904/2024-CR POR EL QUE, CON TEXTO SUSTITUTORIO, SE PROPONE LA "LEY QUE DESIGNA AL PROFESIONAL RESPONSABLE DE LA TUTORÍA, LA ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y EL BIENESTAR SOCIOEMOCIONAL DEL ESTUDIANTE EN LAS INSTITUCIONES Y PROGRAMAS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA, Y ESTABLECE DISPOSICIONES PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE FACTORES DE RIESGO EN LA POBLACIÓN ESCOLAR"